

La gestión racional de sustancias químicas Elemento esencial para mejorar la salud de trabajadores y comunidades en América Latina

Principales logros y resultados de los proyectos implementados
por Sustainlabour con apoyo del Programa de Inicio Rápido
(QSP) de SAICM



La gestión racional de sustancias químicas: elemento esencial para mejorar la salud de trabajadores y comunidades en América Latina

Principales logros y resultados de los proyectos implementados por Sustainlabour con apoyo del Programa de Inicio Rápido (QSP) de SAICM

Producido por Sustainlabour, Diciembre 2014

Autoras: Laura Maffei, Laura Martín Murillo

Gracias a las contribuciones de Isamar Escalona

Este informe ha sido producido con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA a través de su programa conjunto con Sustainlabour “Una transición justa hacia la Sostenibilidad”

Índice

Introducción	4
Los desafíos en la gestión de las sustancias químicas	7
La contribución de los trabajadores de América a SAICM	13
Principales resultados de los proyectos	23
Conclusiones	35
Bibliografía	40

1. Introducción

La innovación y desarrollo de la industria química ha traído consigo enormes beneficios para las sociedades modernas. Sin embargo, la producción y comercialización de los productos químicos ha tenido un crecimiento explosivo y masivo que no ha respetado los ritmos necesarios para hacer una correcta evaluación de los riesgos de las distintas sustancias que cada día ingresan al mercado.

Esto ha provocado una cantidad de consecuencias devastadoras para el ambiente y la salud de las personas. La contaminación química es hoy una de las principales problemáticas ambientales, un problema de escala mundial que ha llegado hasta los rincones más aislados del planeta generando gravísimos problemas de salud en comunidades enteras de plantas, animales y seres humanos.

Las tendencias indican que el ritmo de producción y comercialización de los productos químicos seguirá acelerándose en los próximos años, desplazándose cada vez más hacia los países en desarrollo y economías emergentes, los cuales en términos generales cuentan con menos recursos para hacer un adecuado control de la gestión de las sustancias químicas e implementar medidas de protección para el ambiente o la población.

Desde hace décadas que la comunidad internacional ha establecido diversos mecanismos e instrumentos para regular la gestión de las sustancias químicas. En 2006, la adopción del **Enfoque Estratégico para la Gestión Internacional de Sustancias Químicas (SAICM)** estableció un marco para la integración de estos distintos instrumentos con el objetivo general de lograr la “meta 2020” del Plan de Implementación de Johannesburgo *“lograr que para 2020 los productos químicos se utilicen y produzcan (...) de manera que se reduzcan al mínimo los efectos adversos de importancia que puedan tener en la salud humana y el medio ambiente”*. Junto con la aprobación de SAICM se constituyó el **Programa de Inicio Rápido (QSP)** con la finalidad de apoyar el fortalecimiento de las capacidades para la

implementación de SAICM y promover la participación de los países en desarrollo y países con economías en transición.

Las organizaciones de trabajadores han participado activamente en este proceso, en el entendimiento de que las y los trabajadores se encuentran entre las principales víctimas de la exposición a sustancias químicas, pero con el convencimiento también de que pueden ser parte de la solución como protagonistas activos en la reducción de riesgo químico tanto desde sus puestos de trabajo, como a nivel de las políticas locales y nacionales.

En este contexto, Sustainlabour (Fundación Laboral Internacional para el Desarrollo Sostenible) ha implementado dos proyectos en países de América Latina con el objetivo de fortalecer la capacidad de las organizaciones sindicales de la región para que éstas estén en una mejor posición para contribuir con la implementación de SAICM en sus respectivos países y a nivel regional. Los países cubiertos por los proyectos fueron Brasil, Chile y Uruguay (2008-2010) y El Salvador, Nicaragua y República Dominicana (2011-2013).

Estos países presentaban distintos niveles de actividad económica asociada con la producción y uso de químicos, así como distintos contextos socio-económicos y capacidades institucionales para hacer frente a los desafíos de la gestión de las sustancias químicas y desechos peligrosos. Así, había países con una relativa fortaleza institucional, como en el caso de los países del Cono Sur, pero que presentaban igualmente diferencias importantes en cuanto a las capacidades de diálogo e intervención en las políticas nacionales. En los países de América Central y el Caribe las necesidades eran mucho mayores, tanto en términos de capacidades sindicales como de los organismos responsables de la implementación de las políticas nacionales para la gestión de las sustancias químicas.

Aunque la región ha realizado importantes avances en los últimos años, en todos los países persisten altos niveles de precariedad e informalidad laboral, con valores que van del 36% de empleo informal en Uruguay, a casi 70% en El Salvador o Nicaragua. A excepción de Chile y Uruguay, solo una minoría (entre 20% y 35%) de la Población Económicamente Activa está protegida por algún seguro de salud. Entre otras consecuencias, este bajo nivel de formalidad y protección dificulta enormemente la posibilidad de tener registros de accidentes y enfermedades laborales, mucho menos poder identificar sus vínculos con la exposición a sustancias químicas. Distintas fuentes y estudios¹ estiman valores de sub-registro que van del 70% al 90%, dependiendo del país y del sector.

Así mismo, ha habido importantes avances a nivel de la gestión de sustancias químicas y todos los países han elaborado perfiles y planes de gestión. Sin embargo, aún hay importantes desafíos por delante en lo que respecta a mejorar las capacidades de control y fiscalización para garantizar el cumplimiento de la normativa. En muchos de ellos hay vacíos importantes en áreas como la gestión de residuos electrónicos o etiquetado.

El **objetivo de este documento** es rescatar los principales resultados obtenidos a partir de la implementación de ambos proyectos, con énfasis en su contribución con la gestión segura de las sustancias químicas a nivel nacional, en particular su aporte a la mayor participación y articulación de la sociedad civil en torno a estos temas; y a impactos directos a nivel sectorial y de los puestos de trabajo.

Cabe mencionar que los proyectos estaban dirigidos a trabajadores y sus organizaciones, y que tenían entre sus principales objetivos el fortalecimiento de las organizaciones y agendas sindicales. En este sentido, ambos proyectos tuvieron resultados muy significativos. Nos parece importante señalar que el fortalecimiento de las organizaciones sindicales y el hecho de que la reducción del riesgo químico se

logre instalar en sus programas y planes de acción es un elemento fundamental para que haya una mejor y más cualificada participación de las mismas en los procesos nacionales, así como para que puedan convertirse en actores proactivos en la búsqueda de soluciones y alternativas.

Los argumentos de la protección del empleo y de la competitividad suelen estar a la orden del día ante los intentos por aplicar o reforzar los requerimientos ambientales o la protección de la salud u otros derechos laborales. La comprensión de los riesgos para la salud y el medio ambiente y el compromiso por parte de las organizaciones sindicales para reducirlos son fundamentales para poder avanzar en una agenda ambiciosa.

En la **primera parte** de este documento se hace una descripción de los principales desafíos mundiales y regionales con respecto a la gestión de las sustancias químicas: las tendencias del comercio y producción, los riesgos para el ambiente y la salud, los vínculos con la salud y la seguridad en el trabajo, y los principales instrumentos internacionales para la gestión racional de las sustancias químicas.

En la **segunda parte** del documento se describen las características generales de los proyectos implementados por Sustainlabour en la región con el apoyo del QSP de SAICM. En primer lugar se hace una descripción detallada de los contextos de cada país: a nivel socio-económico, de la gestión de las sustancias químicas, y las condiciones de salud y seguridad laboral.

Seguidamente, se analizan los impactos que el proyecto ha tenido tanto en términos cuantitativos, como el número y caracterización de beneficiarios directos e indirectos; como cualitativos, analizando en particular: la contribución con las agendas nacionales, la promoción del diálogo con los demás actores de interés, la provisión de herramientas y construcción de capacidades, la sensibilización para sectores y grupos específicos, y algunos resultados directos a nivel de los puestos de trabajo.

Como **conclusión** algunas de las principales “lecciones aprendidas” de los proyectos, propuestas y recomendaciones surgidas en estos cuatro años de trabajo colectivo en la región para

1

Distintas fuentes y estudios indican altas cifras de subregistro, entre ellos, el Ministerio de Trabajo del Brasil (MTE, 2012); la Universidad Federal de Bahía (UFBA, 2011); la Aseguradora de Riesgos Laborales de la República Dominicana (Sustainlabour, 2012a), el Instituto de Seguridad Social de Chile (Urzúa, 2010). Este es un problema reconocido por todos los actores que participaron en los proyectos de Sustainlabour apoyados por el QSP. Es un tema sobre el que el movimiento sindical internacional trabaja permanentemente.

avanzar hacia una gestión segura y responsable de las sustancias químicas.

Agradecimientos:

Sustainlabour desea agradecer muy especialmente a las organizaciones sindicales involucradas en la implementación del proyecto, sin cuyo compromiso no hubiese sido posible alcanzar los resultados que se describen en este documento: Confederación de Trabajadores de la Rama Química de Brasil (CNQ/CUT); Central Única de Trabajadores de Chile (CUT); Central Autónoma de Trabajadores Salvadoreños (CATS), la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de El Salvador (CSTS), y la Central de Trabajadores Democráticos (CTD) en El Salvador; Frente Nacional de los Trabajadores (FNT) de Nicaragua; Central Autónoma de Sindicatos Clasistas (CASC), Confederación Nacional Trabajadores Dominicanos (CNTD), Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS) en República Dominicana; y Plenario Intersindical de Trabajadores – Congreso Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) de Uruguay.

Nuestro agradecimiento también a la Confederación Sindical de las Américas (CSA) por su compromiso y su valiosa colaboración en distintas etapas del proyecto.

Se agradece así mismo el apoyo de los Puntos Focales de SAICM y de los distintos organismos gubernamentales que han contribuido en las distintas actividades del proyecto, así como a las Organizaciones no Gubernamentales, organismos intergubernamentales, y demás instituciones que han aportado generosamente con sus experiencias y conocimientos.

Un agradecimiento muy especial al equipo del secretariado de SAICM por su permanente apoyo y acompañamiento a lo largo de estos cuatro años de trabajo.

2.

Los desafíos en la gestión de las sustancias químicas

a. Producción y uso de sustancias químicas a nivel mundial

Los productos químicos forman parte de la vida cotidiana, están presentes en casi todos los artículos que se utilizan y consumen diariamente. Prácticamente no existe sector de la economía que no utilice sustancias químicas: la industria textil, la construcción, la minería, la industria alimentaria, la agricultura, la acuicultura, la salud, el transporte, etc., todos ellos involucran el uso de sustancias químicas en alguno de sus procesos.

De acuerdo con datos presentados en el *Global Chemicals Outlook* (GCO), la producción, uso y consumo de sustancias químicas ha experimentado un crecimiento explosivo y constante en las últimas décadas, pasando de USD171.000 millones en ventas en 1970 a más de USD4,1 billones en 2011. Se estima que para 2020 la producción mundial de sustancias químicas aumentará 85% con respecto a los niveles de 1995. (PNUMA, 2013)

Esta producción está concentrada en un pequeño conjunto de países que dan cuenta de alrededor del 80%, entre ellos algunos emergentes como China y Brasil. Las tendencias muestran una participación cada vez mayor de países en desarrollo y economías en transición, tanto en la producción como uso y disposición final. China es hoy el mayor consumidor de sustancias químicas textiles, con el 42% del consumo mundial; en países de América Latina el consumo de pesticidas aumentó hasta 60% desde fin de los 90. (PNUMA, 2013).

Además del comercio internacional de los productos químicos como tales, una enorme proporción son exportados o importados a través de la comercialización y transporte de los diferentes artículos, o como residuos. Por ejemplo, los productos electrónicos utilizan hasta 500 sustancias químicas diferentes entre las que se cuentan metales pesados y disruptores endocrinos, entre otra cantidad

de sustancias peligrosas. Muchos productos electrónicos se fabrican en países industrializados y son exportados a países con una menor capacidad de control y gestión, donde ocurre la utilización y su disposición final, muchas veces en condiciones inadecuadas. (PNUMA, 2013) Cabe señalar que el sector de los residuos electrónicos (e-waste) es el que más ha crecido en los últimos años, con una tendencia creciente a la transferencia de los residuos hacia países en desarrollo por los menores costes laborales y las regulaciones ambientales más débiles. (PNUMA, 2012a)

Uno de los grandes desafíos para la gestión de las sustancias químicas es que el ritmo de innovación e investigación sobre el desarrollo y uso de productos químicos es mucho más rápido que el del estudio de los aspectos de seguridad y salud relacionados con ellos. El proceso de producción y entrada al mercado se inicia antes de que se evalúen apropiadamente sus riesgos, sin tener en cuenta principios de precaución. (OIT, 2013)

Así, de las 248.000 sustancias que se encuentran en el mercado (PNUMA, 2012), solo se cuenta con información suficiente de una parte menor. Según estudios citados en el GCO, se estima que de las 2.500 sustancias producidas en gran volumen en la Unión Europea, solo 14% de ellas cuenta con datos suficientes para cumplir con los requerimientos de la normativa comunitaria, y para el 21% no se cuenta con ningún dato. En los Estados Unidos de América esta proporción es aún peor: de las 3.000 sustancias que se comercializan en grandes volúmenes (más de 500 ton/año), solo se tiene la información requerida por la OCDE para 7% de ellas, y no hay datos para el 43%. (PNUMA, 2013)

La evaluación de los efectos de las sustancias químicas individuales es un tema de por sí complejo y sobre lo que todavía hay poca información. Más complejo todavía es cuando se trata de evaluar los efectos de exposición

combinada a varios compuestos químicos -cóctel químico- o los efectos sinérgicos de distintas sustancias, un área de conocimiento en la que el vacío de información es aún mayor. (PNUMA, 2012b).

Son innegables los aportes que la utilización de las sustancias químicas han implicado para nuestras sociedades, pero también es innegable que la proliferación y el uso cada vez más masivo de sustancias químicas trajeron consigo importantes problemas para la salud humana y ambiental, desde efectos agudos y crónicos sobre la salud, a contaminación generalizada de suelo, agua y atmósfera. Muchos incendios, explosiones y otros desastres resultan del control inadecuado de los riesgos químicos.

b. Salud pública y ambiental

La contaminación por sustancias químicas es uno de los desafíos ambientales más serios que enfrenta la humanidad, constituye una amenaza grave por sus consecuencias sobre los distintos ecosistemas, afectando la salud humana y ambiental, y los medios de vida de gran parte de la población mundial.

Liberadas a la atmósfera, las sustancias químicas pueden contaminar el aire y producir gases como los de efecto invernadero, destructores de ozono, o contribuir con la lluvia ácida. A su vez, los agentes químicos pueden contaminar los recursos de agua a través de las descargas directas o por la deposición de contaminantes atmosféricos. Esta contaminación puede tener efectos nocivos en organismos acuáticos y en la disponibilidad de agua para consumo humano (PNUMA, 2013). Por ejemplo, según la Perspectiva Mundial del Medio Ambiente (GEO5) un estudio de 2008 encontró que más del 90% del agua y de los peces muestreados estaban contaminados por varios plaguicidas. (PNUMA, 2012b)

Asimismo, derrames industriales, mineros, plaguicidas, deposición de contaminantes atmosféricos, pueden contaminar también el suelo, afectando cosechas cultivadas en suelos contaminados, disminuyendo la productividad agrícola, y provocando efectos sobre la flora, la fauna y la salud humana a través de alimentos o por simple exposición a los contaminantes. (PNUMA, 2013)

La contaminación química se puede dar por diversas fuentes, algunas puntuales, como la contaminación por vertidos industriales que es relativamente más

fácil de controlar que las emisiones de fuentes difusas como puede ser la escorrentía en zonas agrícolas. Entre las principales preocupaciones se encuentran los metales pesados, solventes clorados, contaminantes orgánicos derivados de fertilizantes y plaguicidas organofosforados, muchos de ellos Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP). (PNUMA, 2012b)

La contaminación accidental de los alimentos y el agua por plaguicidas es común en los países en desarrollo debido a deficiencias en el manejo, almacenaje y uso. Esto se ve agravado por la presencia de plaguicidas peligrosos que ya se han reemplazado en los países desarrollados por productos más seguros. (Buccini, 2006). Así mismo, la presencia de plaguicidas obsoletos es un desafío para muchos países en desarrollo. Por ejemplo, en América Latina se calcula que hay unas 11.000 toneladas de plaguicidas obsoletos, a menudo mal almacenados, lo que expone a las personas a sus efectos nocivos y representa un riesgo para la contaminación de suelos y aguas. (CEPAL, 2010)

Otra preocupación es la disposición final de desechos peligrosos. En muchos países en desarrollo éstos se mezclan con los desechos municipales o con desechos domiciliarios y son vertidos o quemados a cielo abierto sin ningún tipo de tratamiento previo. (ONU-Habitat 2010).

Se estima que tan solo en Europa, Estados Unidos y la Federación Rusa hay dos millones de sitios contaminados por sustancias químicas, pero los datos para los países en desarrollo o economías en transición son más difíciles de obtener (PNUMA, 2012b). El Instituto Blacksmith, dedicado al seguimiento y recuperación de sitios contaminados, monitorea actualmente unos 3.098 sitios altamente contaminados en países de ingresos medios y bajos, lo que según sus datos estaría afectando la salud de 84 millones de personas. (Blacksmith, 2014)

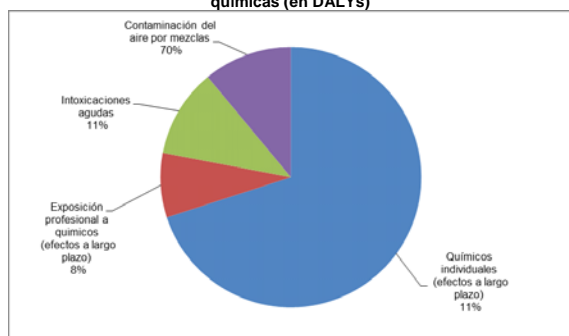
Según distintos estudios citados por el GEO5, no está claro el efecto que el aumento de la temperatura debido al cambio climático podría tener en la degradación de los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) u otras sustancias altamente contaminantes, pero sí advierte de que el derretimiento del hielo sobre el cual se han acumulado durante décadas contribuiría probablemente aumentar las cantidades de COP y

de otros contaminantes circulando en el medio. (PNUMA, 2012b)

Como se dijo, la contaminación química tiene serias consecuencias para la salud. Los datos que presenta el Instituto Blacksmith son contundentes: la contaminación por sustancias tóxicas mata a 10 millones de personas por año, lo que equivale a tres veces las muertes por HIV/SIDA, malaria y tuberculosis juntas. En el mundo en desarrollo, ésta es la primera causa de muerte. (Blacksmith, 2014)

A pesar de la falta de información y el sub-registro, un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) presentado en la tercera sesión de la Conferencia Internacional de Gestión de Sustancias Químicas (ICCM3) reveló que, solo considerando una cantidad limitada de sustancias, en 2004 el número de muertes debido a contaminación química fue de 4,9 millones (8,3% del total); y 86 millones de Años de Vida Ajustados por Discapacidad² (DALYs, en inglés). (ICCM3, 2012). Se estima que aproximadamente 71% de los envenenamientos no intencionales registrados en 2004 se podrían haber prevenido con medidas de seguridad relativamente simples, evitando 240.000 muertes y 5 millones de DALYs. (Prüss-Ustün et ál. 2011).

Gráfico 2: Distribución de la carga de enfermedad atribuible a sustancias químicas (en DALYs)



Fuente: Prüss-Ustün et ál. 2011

Aunque la contaminación química es un problema de dimensiones globales, en muchos casos es posible lograr mejoras importantes para la calidad de vida y la salud ambiental mediante medidas y controles relativamente accesibles y de carácter local. Por ejemplo, la remoción y tratamiento del suelo contaminado con plomo en los Bajos de Haina (República Dominicana, uno de los sitios más contaminados del mundo), realizada entre 2007 y

² DALYs es la medida ponderada que estima los años de vida perdidos por muerte prematura, y años de vida con discapacidad. Un DALY equivale a un año de vida saludable perdido.

2010, tuvo un coste de USD404.000, logrando mejoras en distintos indicadores de salud ambiental y humana. (PNUMA, 2013)

Según la OMS, la exposición al plomo produce unas 143.000 muertes por año. La exposición al plomo de niños causa cada año 600.000 nuevos casos de discapacidad intelectual. (OMS, 2013b)

Considerando solamente los niños menores de 5 años expuestos a plomo en América Latina, el Global Chemicals Outlook calcula en USD550 millones los costos derivados de la pérdida de DALYs, y una pérdida de productividad económica de USD28.000 millones para la región. (PNUMA, 2013).

Tabla 1: Pérdida de productividad regional como consecuencia de efectos del plomo sobre el IQ en niños menores de 5 años. África, América Latina y Sudeste Asiático

Región	Niños <5 años	Niños < 5 años, con BPb >5	Producto económico a lo largo de la vida por punto de IQ (US\$)	Pérdida total de productividad económica (US\$)
África	119.869.281	8.151.111,11	576,72	12.000 millones
América Latina	55.196.305	3.974.133,95	2.707,35	28.000 billones
Sudeste Asiático	183.284.968	27126175,28	972,82	68.000 billones

Fuente: Global Chemicals Outlook (GCO). 2013

c. Los riesgos para la salud de las y los trabajadores

Dentro de los grupos de mayor exposición al riesgo químico se encuentran millones de trabajadores y trabajadoras para los que, además de la exposición ambiental o en el hogar, se suma la manipulación o contacto con sustancias químicas en sus lugares de trabajo. Trabajadores de la industria química y también en sectores posteriores de la cadena productiva en los que se utilizan esas sustancias: la agricultura, la construcción, el comercio, la carpintería, el sector automotor, textil e informático, limpieza, pintura, entre muchos otros.

Se estima que cerca de 30.000 químicos diferentes se utilizan en los lugares de trabajo de todo el mundo, pero solo 1 de cada 100 ha pasado por alguna prueba rigurosa sobre sus efectos sobre la salud o el ambiente (Sustainlabour, 2013)

La exposición a sustancias químicas es mundialmente una causa importante de mortalidad asociada a las condiciones laborales. Sin embargo, hay dificultades para poder determinar el alcance

de los efectos sobre la salud, entre otras, la falta de información sobre posibles efectos y el tiempo que puede transcurrir entre la exposición y la aparición del daño. Además, aún en los casos en que los efectos son conocidos, hay en general un bajo registro de enfermedades o accidentes laborales relacionados con la exposición a sustancias químicas. Aunque el subregistro y falta de información es un problema mundial, la informalidad laboral y la falta de cobertura son algunas de las razones por las que el este problema es especialmente marcado en muchos países en desarrollo. (OIT, 2013a) Algunos grupos, como aquellos de la economía informal, trabajadoras domésticas o migrantes, encuentran barreras significativas para informar intoxicaciones o enfermedades. (Sustainlabour, 2013)

Se estima que la exposición a sustancias químicas juega, directa o indirectamente, un papel muy importante en el desarrollo de las más de 2,34 millones de muertes laborales y las 160 millones de enfermedades ocupacionales no mortales que se registran cada año, esto implica más de 6.000 muertes cada día. (OIT, 2013b)

Los trabajadores y trabajadoras de todos los sectores están expuestos a las sustancias peligrosas en sus lugares de trabajo. Particularmente preocupante es la exposición de trabajadores en áreas en las que el uso de químicos está creciendo rápidamente; estas áreas incluyen los productos electrónicos, la industria textil, la minería, la construcción, servicios de limpieza, peluquerías y agricultura³.

Muchas de las sustancias a las que los trabajadores se exponen en el lugar de trabajo son consideradas cancerígenas. La OMS estima que el cáncer atribuible a exposición laboral varía entre 4 y 40% de la carga mundial de cáncer y causa cerca de 200.000 muertes al año (OMS, 2007). Se estima que la exposición laboral a amianto (o asbestos), sílice y humos metálicos, es responsable por 9% de los cánceres de pulmón, tráquea y bronquios. (OPS, 2014)

Dentro de la Enfermedades No Transmisibles, el cáncer es la segunda causa de muerte en el continente americano. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC/OMS) ha identificado al menos 15 carcinógenos pulmonares

³ Agencia Europea para la Salud y la Seguridad en el Trabajo (EU-OSHA). Disponible en : <https://osha.europa.eu/en>

para los cuales la exposición en el lugar de trabajo resulta ser fundamental. La OIT considera al cáncer ocupacional como la mayor causa de muerte relacionada con el Trabajo en todo el mundo, con más de 760.000 fallecimientos por año; casi un tercio de las muertes están ligadas a circunstancias laborales, más que las muertes por accidentes, problemas circulatorios e infecciones.⁴ El cáncer de pulmón y el mesothelioma responden por 50% de las muertes. (Sustainlabour 2013) Entre los sectores de mayor riesgo de cáncer por exposición laboral se encuentran la pintura y la producción de caucho (OPS, 2014)

El uso de plaguicidas es también una de las principales causas de accidentes y enfermedades laborales. Se calcula que alrededor del 3% de los trabajadores agrícolas sufren de un episodio de intoxicación aguda por plaguicidas cada año. (PNUMA, 2012b)

El cáncer, los desórdenes neurológicos, endócrinos, respiratorios, renales y reproductivos son algunos de los problemas de salud asociados a la exposición a plaguicidas. Estas estimaciones no incluyen los hijos e hijas de los trabajadores rurales, severamente afectados por la exposición a plaguicidas. Es común encontrar recién nacidos con malformaciones en las áreas de cultivo intensivo. (Sustainlabour 2013)

La exposición a químicos peligrosos en los procesos de tratamiento de residuos y en la construcción, como los productos sílice cristalina también han sido identificados como riesgos emergentes.(Sustainlabour 2013)

Con altos niveles de informalidad y precariedad laboral, los déficits en materia de salud y seguridad laboral en América Latina son importantes. En un marco general de crecimiento y mayor integración, la región comienza a abordar en los últimos años esta materia pendiente, que lentamente se va incorporando en las agendas políticas de gobiernos, empresas y sindicatos. (OISS, 2013)

Al momento de elaboración de este documento se encuentra en etapa de observaciones y comentarios la nueva Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020,

⁴ OIT. Safety in numbers. Pointers for a global safety culture at work. Organización Internacional del Trabajo. Ginebra, 2003.

elaborada por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS). La Estrategia constituye en principio una oportunidad para elaborar un diagnóstico compartido sobre la situación y un plan de trabajo global acordado entre gobierno, sindicatos y patronal. Sin embargo, las organizaciones sindicales que participan en el proceso advierten que el tema de riesgo químico está a día de hoy virtualmente ausente en la estrategia⁵. Se hace necesaria una mención explícita sobre el abordaje de la gestión de sustancias químicas al considerar ésta una actividad de gran riesgo si se desconocen las consecuencias de su inadecuada manipulación. Siendo además que ya existen compromisos por parte de los Estados de la región para avanzar en políticas adecuadas en esta línea.

d. La gestión de las sustancias químicas

La producción y uso de sustancias químicas contribuyen al desarrollo económico y a mejorar las condiciones de vida. Sin embargo, sin una gestión y control adecuados, la contaminación de agua, suelo y aire por productos químicos tóxicos conlleva altos riesgos, con costos sociales y económicos elevados. Es un problema de carácter global cuya solución requiere un abordaje integral y la implementación de acciones tanto a nivel local como a escala regional y mundial.

En el Plan de Implementación de Johannesburgo⁶, los países reafirmaron el compromiso de hacer un uso racional los productos químicos durante todo su ciclo de vida con el fin de contribuir al desarrollo sostenible y proteger la salud humana y el ambiente. En particular, la comunidad internacional se comprometió a *“lograr que para 2020 los productos químicos se utilicen y produzcan (...) de manera que se reduzcan al mínimo los efectos adversos de importancia que puedan tener en la salud humana y el medio ambiente”*.(Capítulo 3, párrafo 23)

En febrero de 2006 en Dubai, la Conferencia Internacional de Gestión de Sustancias Químicas (ICCM) adoptó el **Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos Químicos a Nivel Internacional (SAICM)**, con el objetivo de dar

⁵ Entrevista con la responsable de Salud y Seguridad Laboral de la Confederación Sindical de las Américas, realizada en 19 de agosto de 2014.

⁶ Aprobado en 2002 en el marco de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Rio+10)

cumplimiento a las metas asumidas en el Plan de Johannesburgo.

SAICM se propuso como un sistema marco internacional que permitiera mejorar la integración y aprovechar las sinergias derivadas de la implementación de los diversos instrumentos internacionales para la gestión de sustancias químicas: el Convenio de Basilea, sobre movimientos transfronterizos de desechos peligrosos; el Convenio de Rotterdam, sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo para el comercio internacional de ciertos químicos peligrosos; el Convenio de Estocolmo, sobre contaminantes orgánicos persistentes (COP); el Protocolo de Montreal sobre las sustancias destructoras de Ozono; el sistema mundial armonizado de etiquetado (GHS, en inglés); el Registros de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC); entre otros instrumentos y acuerdos internacionales.

Para contribuir con la implementación de SAICM, se estableció el **Programa de Inicio Rápido (QSP)**. Su principal objetivo es apoyar la construcción de capacidades en países en desarrollo y con economías en transición a través de proyectos de alcance nacional y regional. A través del Fondo Fiduciario del QSP se han implementado 158 proyectos en más de 100 países. En América Latina el QSP ha apoyado 44 proyectos (35 de alcance nacional y 9 regionales). (QSP, 2014)

La información recopilada durante el periodo de 2009 a 2010 por SAICM indica que a nivel de América Latina y el Caribe ha habido importantes avances en la última década, en especial en las áreas de gobernanza y fomento de la capacidad. La mayoría de los países ha ratificado los distintos instrumentos internacionales y muchos han progresado en cuanto a la elaboración de planes y políticas nacionales para la gestión racional de las sustancias químicas. En comparación con el resto del mundo, la región cuenta con el porcentaje más elevado de países que han establecido un comité para coordinar la implementación de SAICM. (SAICM, 2014)

Sin embargo, persisten graves deficiencias, en particular, hay en general importantes debilidades institucionales para la implementación de los compromisos y para lograr la aplicación efectiva de la normativa. La mayoría de países de la región no dispone de legislación que regule la gestión de

desechos peligrosos y no cuenta aún con normativa para el etiquetado de los componentes de los productos químicos, y específicamente del Sistema Mundialmente Armonizado, aunque varios países están desarrollando en la actualidad proyectos para fomentar esta capacidad que se estima concluirán antes de la cuarta sesión de la Conferencia Internacional sobre la Gestión de los Productos Químicos en 2015.

Además, por la propia naturaleza transversal de los temas de químicos, en muchos países en desarrollo la regulación, la gestión y el control de las sustancias químicas suelen estar dispersas en diferentes ministerios y organismos, donde se superponen funciones y jurisdicciones, dificultándose el abordaje integrado de la problemática. (PNUMA, 2012b)

En un contexto general con condiciones sociales y laborales precarias, y controles ambientales laxos, una gestión segura de los químicos se hace imprescindible para mejorar las condiciones de vida y reducir la degradación ambiental. Al mismo tiempo, esas mismas condiciones muchas veces contribuyen a que la agenda de seguridad química quede relegada y se prioricen enfoques orientados hacia un crecimiento económico que genere empleos y divisas, sin tener en cuenta las condiciones de esos empleos y las consecuencias para la salud laboral, pública o ambiental.

La contribución de los trabajadores para implementar SAICM en América Latina

a. *Sustainlabour: trabajar junto a los trabajadores para reducir el riesgo químico*

El Enfoque Estratégico SAICM destaca desde su concepción la importancia del involucramiento de los distintos actores sociales para lograr el objetivo de la gestión racional de sustancias químicas y avanzar hacia la meta 2020 de Johannesburgo. Además de las organizaciones ligadas a la industria química y sectores académicos, muchas redes internacionales de ONGs y sindicatos¹ han contribuido y acompañan los distintos procesos internacionales.

A nivel nacional también existen mecanismos de diálogo con los distintos actores sociales para la implementación de los planes y políticas de químicos. El grado y alcance de la participación varía enormemente de acuerdo con los contextos nacionales, la tradición de diálogo en uno u otro país, y las capacidades o niveles de organización de los distintos grupos sociales. En muchos casos, en particular en muchos países de América Latina, las ONGs y organizaciones sociales siguen encontrando dificultades de acceso a la información necesaria para poder intervenir de manera adecuada en estos procesos. (CEPAL, 2010)

Dentro de las distintas organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de trabajadores tienen la posibilidad de acción directa para avanzar en el manejo seguro de las sustancias químicas en los centros de trabajo, pero también tienen un importante papel que jugar a nivel de las políticas locales y nacionales.

¹ A nivel internacional, el movimiento sindical ha participado activamente en el desarrollo del Enfoque Estratégico SAICM. La Confederación Sindical Internacional (CSI) se involucró desde el comienzo en el proceso de negociación, participando y haciendo sus aportes en las diferentes Reuniones "PrepCom" de SAICM.

Entre 2008 y 2013 Sustainlabour desarrolló dos proyectos, de dos años cada uno, en países de América Latina con el apoyo financiero del QSP de SAICM. Ambos proyectos estuvieron dirigidos a sindicatos y trabajadores y tuvieron como objetivo general mejorar las capacidades de actuación de los trabajadores y sus sindicatos para contribuir con la gestión racional de las sustancias químicas. Esto incluyó el fortalecimiento del diálogo con otros actores; la identificación de capacidades y necesidades; la sensibilización y difusión sobre riesgos químicos en sectores específicos; formación en temas de seguridad y gestión de químicos; una mejor integración de los temas laborales en la agenda de químicos y viceversa, etc.

En las tablas que siguen se sintetizan las principales características de cada uno de los proyectos y algunas cifras que permiten inferir el alcance de sus resultados. En la Sección 4 se analizarán en mayor detalle los resultados de cada uno de ellos.

El primer proyecto, aprobado en la 3ra. ronda de propuestas QSP, fue galardonado con el premio de **"Mejor proyecto QSP de Sociedad Civil en América Latina"**, en la 4ta. Reunión regional de SAICM, realizada en México en agosto de 2013². El segundo proyecto fue aprobado en la 10ma. Ronda de proyectos del QSP, la propuesta se basó en los resultados y lecciones aprendidas del primero, adaptándolo al contexto de América Central y el Caribe.

² Más información en http://www.saicm.org/index.php?option=com_content&view=article&id=481&catid=9

Tabla 2: "Facilitar la implementación de SAICM por parte de los trabajadores y trabajadoras en el lugar de trabajo"	
Duración del proyecto	Octubre 2008 - Septiembre 2010
Alcance geográfico	Brasil, Chile, Uruguay
Sectores involucrados	Minería, industria química, producción de papel, agricultura, petróleo, fabricación de pesticidas, industria plástica, salmonicultura, producción de caucho, metalúrgica, etc.
Beneficiarios directos	683 personas (30% mujeres) en actividades presenciales
Alcance	Más de 35.000 receptores de materiales de difusión, campaña, guías de formación por vía electrónica (25.000) e impresa (11.000).
Organizaciones alcanzadas	72 organizaciones sindicales (9 millones de trabajadores/as afiliados)
Cofinanciación (en dinero /en especie)	Sustainlabour, Fundacentro (Brasil), y organizaciones involucradas de los tres países

Tabla 3: "Fortalecer las capacidades sindicales para la promoción de una gestión sostenible de las sustancias químicas"	
Duración del proyecto	Agosto 2011 - Septiembre 2013
Alcance geográfico	El Salvador, Nicaragua, República Dominicana
Sectores involucrados	Minería, agricultura, agua y saneamiento, trabajadoras domésticas, petróleo, metalúrgica, funcionarios públicos, personal de puertos y aeropuertos, salud, recuperadores de residuos, maquilas ¹ , etc.
Beneficiarios directos	689 personas (30% mujeres) en actividades presenciales
Alcance	Cerca de 30.000 receptores de materiales de difusión, campaña, guías de formación, por vía electrónica (20.000) e impresa (9.000). Más de 1 millón de receptores en medios de prensa gráfica (150 mil) y radial (1 millón).
Organizaciones alcanzadas	53 organizaciones sindicales (650.000 trabajadores/as afiliados)
Cofinanciación (en dinero / en especie)	Sustainlabour; Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través de ACTRAV; Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), a través de la Fundación Paz y Solidaridad (CCOO); y organizaciones sindicales involucradas en El Salvador y República Dominicana (en especie),

¹ El término "maquila" es utilizado en varios países de la región. Hace referencia a fábricas de manufacturas textiles o dedicadas al ensamblaje a partir de componentes importados y cuyos productos los comercializa otra empresa, normalmente en otros países. Están ubicadas en zonas francas o de libre comercio, con regímenes aduaneros y tributarios distintos (más permisivos) a los del país en el que se establecen. Suelen tener condiciones precarias de trabajo y no respetar la normativa laboral del país.

b. Alcance geográfico de los proyectos: heterogeneidad regional

Los países involucrados en ambos proyectos presentaban una gran heterogeneidad. Los contextos económicos y sociales eran muy diversos, así como la situación de la gestión de sustancias químicas, y las capacidades institucionales y de la sociedad civil para contribuir en estos procesos.

Contexto socioeconómico

El primer proyecto, que abarcó **Brasil, Chile y Uruguay**, se desarrolló en un contexto de fuerte articulación regional (principalmente a través del Mercosur) y países que, aunque con diferencias, tienen democracias consolidadas, una sociedad civil activa y pujante, economías más o menos estables, y un creciente peso político y económico en el contexto internacional.

Brasil, con una población de 200 millones (85% urbanizada) y el mayor territorio de América Latina, es una de las potencias emergentes. Su economía es una de las más grandes del mundo, con un PIB que lo ubica en el 5to puesto. (Banco Mundial, 2014) Se han logrado enormes avances en términos de inclusión social en los últimos 20 años, fundamentalmente por la implementación de políticas muy activas de combate a la pobreza y distribución de la riqueza. En 20 años, Brasil pasó de índices de pobreza de 43,4% a 18,6%. (CEPAL, 2014)

A pesar de estos progresos, restan por resolver desafíos muy importantes: la quinta economía mundial se encuentra en el puesto 79 del ranking en términos de IDH¹ y está entre los más desiguales del mundo en términos de ingresos (PNUD, 2014) (Banco Mundial, 2014). A nivel laboral, un 5,9% de las y los trabajadores se encuentran por debajo de la línea de pobreza (PNUD, 2014), y la tasa de empleo no registrado se estima en un 51% (OIT, 2013). La Población Económicamente Activa cubierta por el Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) apenas alcanza al 30%. (MTE, 2014)

En el caso de **Chile** y **Uruguay**, son países relativamente pequeños tanto en territorio como en población, con 17,5 y 3,4 millones respectivamente y

niveles de urbanización que rondan el 90%. Con economías mucho más pequeñas que la brasileña, tienen sin embargo un PIB per cápita en un 40% superior, equiparable a países como Portugal. Aunque tienen importantes desafíos sociales pendientes, Chile y Uruguay se encuentran entre los que se consideran países con nivel de desarrollo alto en términos de IDH, ocupando a nivel mundial el puesto 41 Chile y el puesto 50 Uruguay. (PNUD, 2014)

Los niveles de pobreza en Chile llegan a 11%, en tanto en Uruguay es del 5,9% (CEPAL, 2014). La desigualdad de ingresos en Chile es similar a la brasileña, encontrándose 52 puestos por detrás de Uruguay en el ranking de equidad². (Banco Mundial, 2014) Los índices de desempleo en ambos países rondan el 6%, con una informalidad cercana a 40% y una cobertura de salud de la población ocupada que llega a alrededor del 90%. (PNUD, 2014) (CEPAL, 2014)

El segundo proyecto se desarrolló en una región que en general cuenta con mayores dificultades sociales y debilidades institucionales importantes. Con una alta densidad de población y niveles de urbanización entre el 60 y 65%. **El Salvador, Nicaragua y la República Dominicana** presentan en general indicadores sociales muy por debajo de los que se muestran en la región del Cono Sur de América Latina. Los tres países se encuentran entre los países con desarrollo medio según el ranking de IDH. (PNUD, 2014)

En el caso de **El Salvador**, las cifras son elocuentes: con una tasa oficial de desempleo del 6%, más del 70% de los trabajadores se encuentran en el sector informal. La tasa de pobreza ronda el 45%, y 12 de cada cien salvadoreños se encuentran en la pobreza extrema. (CEPAL, 2014) En diciembre de 2011, la población trabajadora protegida por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) apenas llegaba a 24% de la población económicamente activa. (Sustainlabour, 2012a)

Con 58,3%, la tasa de pobreza de Nicaragua es de las más altas la región, focalizada principalmente en la zona rural (65%). Las estadísticas indican que 29 de cada 100 nicaragüenses se encuentran en la indigencia. (CEPAL, 2014) El nivel de desempleo se acerca al 10% (PNUD, 2014), y los trabajadores

¹ Índice de Desarrollo Humano

² Medido según el índice Gini.

registrados no superan el 35% de la población ocupada. El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) daba cobertura en 2011 a solo el 20% de la población ocupada.³

En la **República Dominicana**, las estadísticas muestran niveles del 15% de desempleo (25,5% si se considera solo a la población menor de 30 años), siendo que 41 de cada cien dominicanos se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Así mismo, 58% de los trabajadores están en la informalidad (CEPAL, 2014); y sólo el 35% de los trabajadores cuentan con algún tipo de protección frente a contingencias laborales (Sustainlabour, 2012c).

El contexto del uso y regulación de sustancias químicas

La situación es bien diversa, con países como Brasil y Chile que son importantes productores mundiales y ocupan los puestos 4 y 20 respectivamente en ventas (PNUMA, 2013), a países que son fundamentalmente usuarios en los distintos sectores, entre los que se destaca la agricultura pero también hay utilización y manipulación de sustancias químicas en muchos otros: metalurgia, industria textil, papel, curtiembres, minería, limpieza, salud, transporte, etc.

En **Brasil**, la industria química responde por cerca de 3% del PIB nacional y 11% de la facturación de todas las industrias instaladas en el Brasil, lo que lleva al país a estar en el cuarto puesto del ranking mundial. La porción más grande la representan fábricas de productos químicos y de plásticos, de las cuales cerca del 95% son de pequeño porte y están concentradas en el sur del país. (Sustainlabour, 2009a)

El país cuenta con una amplia legislación, planes y programas para la gestión de sustancias químicas. Ha firmado y ratificado las Convenciones internacionales relativas al tema⁴, y la mayoría de las normas de la OIT sobre Químicos y sobre Salud y Seguridad Laboral⁵. Cuenta además con distintos

³ Banco Central de Nicaragua, 2012

⁴ Convención de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP); Convención de Róterdam sobre Procedimiento de Consentimiento Previo Informado para el Comercio Internacional de Determinadas Sustancias Peligrosas; Convención de Basilea sobre Control de Movimientos Transfronterizos de Residuos Peligrosos y su Eliminación.

⁵ C115: Convenio sobre protección contra radiaciones; C120: Convenio sobre higiene (comercio y oficinas); C139: Convenio sobre cáncer profesional; C148: Convenio sobre medio

mecanismos de participación con representación de los diversos actores sociales, incluyendo a los trabajadores, como la Comisión Nacional de Seguridad Química (CONASQ), que estaba inactiva hacía tres años al momento de implementar el proyecto de Sustainlabour; Comisión para el Desarrollo Sostenible (CPDS); órganos tripartitos y bipartitos.

En **Chile**, el crecimiento económico de las últimas décadas ha ido acompañado del incremento en el uso de sustancias peligrosas, tanto en volumen como en variedad. Además de la industria química, se suma una cantidad de empresas intensivas en el uso de productos químicos, como refinerías de petróleo, la industria siderúrgica, de celulosa y papel, petroquímica, minería de cobre, etc. A día de hoy Chile se encuentra en el vigésimo lugar entre los países con mayores ventas de productos químicos. (PNUMA, 2013)

Con este importante crecimiento en el uso de distintos tipos de sustancias químicas, Chile elaboró en 2008 su "*Política Nacional de Seguridad Química*" (PNSQ), con el principal objetivo dar coherencia a un conjunto de normas de distinta jerarquía que regulaban temas específicos sobre sustancias peligrosas, así como brindar soluciones a la superposición de funciones de las distintas instituciones con competencia en la materia (PNSQ, 2008). La PNSQ fue desarrollada por la Comisión Nacional de Medio Ambiente –CONAMA– en la que participan distintas organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil, pero sin participación sindical al momento de iniciar el proyecto. (Sustainlabour, 2009b)

A su vez, se estaban llevando a cabo distintas iniciativas en el marco de SAICM, entre ellas la actualización del *Perfil Chileno Sobre la Gestión de las Sustancias Químicas*, con apoyo de UNITAR; y una campaña para la minimización de fuentes domésticas de mercurio, como parte de un proyecto regional implementado por la Asociación de Médicos por el Medio Ambiente (AMMA), ambas financiadas a través del Fondo Fiduciario del QSP de SAICM. (Jara, 2009)

ambiente de trabajo; C155: Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores; C161: Convenio sobre servicios de salud en el trabajo; C162: Convenio sobre amianto; C167: Convenio sobre seguridad y salud en la construcción; C170: Convenio sobre productos químicos; C174: Convenio sobre prevención de accidentes industriales ampliados; C176: Convenio sobre seguridad y salud en la minería

Cabe señalar que Chile es signatario de numerosos Acuerdos Multilaterales Ambientales, así como acuerdos y convenciones internacionales relativos a la gestión de sustancias químicas⁶. Sin embargo, al momento de implementar el proyecto habían sido ratificados sólo tres de los trece Convenios de la OIT sobre distintos aspectos vinculados a la Salud y Seguridad Laboral y químicos⁷. (Sustainlabour, 2009b) A 2014, se ha agregado la ratificación del Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo (C.187), en abril de 2011.

El Salvador es usuario de productos químicos en los distintos sectores de su economía, caracterizada por una alta participación relativa en el PIB de la industria manufacturera (26%, del cual la mitad corresponde a maquilas) y 13% de la agricultura. (Sustainlabour, 2012a)

Los resultados de la Primera Encuesta Centroamericana de Condiciones de Trabajo y Salud, llevada a cabo en 2011, muestran que en El Salvador cerca del 19% de los hombres y 11% de las mujeres, manifiestan estar expuestos directamente a sustancias químicas en sus lugares de trabajo. Un 52% declara hacerlo sin ningún tipo de equipo de protección personal. (OISS, 2012) Uno de los principales problemas es el uso masivo de agrotóxicos, en muchas ocasiones aplicados por medios aéreos. Otro de los sectores más afectados es el de la maquila, en particular la textil. Desde 2012 se conmemora el "*Día Nacional de la Trabajadora de la Maquila*", en recuerdo de la intoxicación masiva con cloro de más de 200 trabajadoras de una maquila textil en la zona franca de Olocuilta en 2001. (Sustainlabour, 2012a)

El país cuenta con abundantes instrumentos regulatorios y ha ratificado la mayoría de los acuerdos internacionales⁸ sobre gestión de

sustancias químicas. Sin embargo, hay importantes debilidades que deben superarse. Uno de los principales problemas, que no es exclusivo de la cuestión de las sustancias químicas, es el bajo cumplimiento de la normativa, y la debilidad de las instituciones públicas responsables de la vigilancia, control y sanción. El país cuenta también con espacios multisectoriales como la Comisión Seguridad Química (COSEQUI), y tripartitos como la Comisión Nacional de Seguridad Ocupacional (CONASO). A la fecha en que se implementó el proyecto de Sustainlabour ambas comisiones tenían un funcionamiento irregular. (Sustainlabour, 2012a)

En Nicaragua, el incremento en el uso de químicos industriales en la actividad minera y en las zonas francas, ambos sectores de gran crecimiento en los últimos años, es un elemento de preocupación. Al igual que en el Salvador, la situación de contaminación por plaguicidas es alarmante: según datos del Ministerio de Salud cada año se reportan cerca de 1.500 intoxicaciones agudas por plaguicidas, con unas 160 muertes y numerosos efectos crónicos. La Insuficiencia Renal Crónica, una enfermedad característica de la exposición a agroquímicos que está azotando toda la región, se cobró en 2010 más de mil muertes en Nicaragua. (Sustainlabour, 2012b) (OPS, 2014)

La I Encuesta de Condiciones de Trabajo y Salud de América Central da cuenta de que casi la mitad de la población trabajadora de Nicaragua está expuesta o manipula sustancias químicas en el trabajo. Según esta encuesta, el 42% de los trabajadores y trabajadoras no cuenta con ningún tipo de Equipo de Protección Personal (EPP) frente a los riesgos laborales. (OISS, 2012)

En 2010 se realizó una segunda edición del Perfil Nacional "*Evaluación de la Infraestructura Nacional para la Gestión de Sustancias Químicas*", con conclusiones y recomendaciones en plena

⁶ Directrices de Londres, sobre intercambio de información de Productos Químicos objeto del comercio internacional; Convenio de Viena y Protocolo de Montreal, relativos a la protección de la Capa de Ozono y las sustancias químicas que la alteran; Convención de Estocolmo, sobre los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP); Convención de Róterdam, sobre el Procedimiento de Consentimiento Previo Informado para el Comercio Internacional de Determinadas Sustancias Peligrosas; Convención de Basilea, sobre el Control de Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Eliminación

⁷ C115: Convenio sobre la protección contra las radiaciones; C161: Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo; C162: Convenio sobre el asbesto.

⁸ Perfil Nacional para Evaluar la Infraestructura Nacional para la Gestión de Sustancias Químicas (2006); Política Nacional de Medio Ambiente (2004, revisada 2011); Convenio de Rotterdam

sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo (PIC); Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs); Convenio de Basilea sobre los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos; Convenio de Viena y su Protocolo de Montreal sobre las Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono; Foro Intergubernamental para la Seguridad Química (FISQ); Convenio No. 155 de la OIT sobre Seguridad y Salud de Los Trabajadores; Convenio No. 170 de la OIT sobre el Manejo de Sustancias Químicas; Convenio No. 172 de la OIT sobre Accidentes Mayores (firmados); entre otros.

vigencia. Además de señalar la falta de recursos técnicos, humanos y financieros como la principal limitación, este documento menciona específicamente la *“insuficiente presencia y trabajo sindical sobre el tema”*, así como la *“necesidad de dar vida a los organismos tripartitos –conformados por sindicatos, organizaciones patronales y gobierno- a fin de consensuar políticas preventivas”*.

En la **República Dominicana**, la situación de exposición a sustancias químicas es un tema de gran preocupación. Según datos del Informe de Desarrollo Humano de 2008, el 66% de la población reconoce vivir cerca de alguna fuente de contaminación ambiental. El uso de pesticidas en el sector agrícola; la utilización de mercurio, principalmente en la minería artesanal de oro; la contaminación de agua y suelo por lixiviados de los vertederos; los vertidos de aguas servidas; etc. son algunos de los principales factores de preocupación.

El país cuenta desde 2013 con el *“Perfil Nacional para la Gestión de Productos Químicos”*, una iniciativa que busca, entre otras cosas: promover la coordinación interministerial, facilitar el acceso e intercambio de informaciones, establecer prioridades, promover la participación de todas las partes interesadas (incluidas organizaciones sindicales), e integrar los programas de gestión de sustancias químicas en las políticas nacionales y procesos de planificación.

Además del Perfil Nacional, hay una importante cantidad de instrumentos regulatorios y ratificación de la mayoría de instrumentos internacionales⁹. Sin embargo, aún existen debilidades y deficiencias que es necesario superar para poder lograr el objetivo de un manejo seguro de las sustancias químicas. Entre las principales, mejorar la capacidad técnica y operativa de los organismos responsables por asegurar el cumplimiento de la normativa.

Por su parte, en **Uruguay** el modelo de sustitución de importaciones implementado a partir de la Segunda

⁹ La Ley General Sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales; El Reglamento para la Gestión de Sustancias y Desechos Químicos Peligrosos; Declaración del FISQ de Bahía; Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento Fundamentado Previo (PIC); Convenio de Estocolmo sobre los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs); Convención 170 de la OIT; Convenio de Basilea sobre el Movimiento Transfronterizo de Desechos Peligrosos; la Convención sobre Armas Químicas; Convenio de Basilea; Registros de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETCs).

Guerra Mundial favoreció el desarrollo de industrias de procesamiento, entre las cuales aparecen fábricas de productos químicos propiamente dichas, así como otras actividades en que se incrementa el uso de productos químicos: la industria del caucho, las curtiembres y textiles, las fábricas de papel, la industria metalúrgica y la industria gráfica.

El Uruguay cuenta con abundante normativa sobre distintos aspectos de la gestión de las sustancias químicas, por ejemplo el Decreto N° 307/09, sobre la *“Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los Riesgos relacionados con los Agentes Químicos durante el Trabajo”*. Este Decreto establece principios y medidas para la protección de la salud de los trabajadores y trabajadoras, disposiciones sobre la información y la formación, y sobre la consulta y participación de trabajadores y trabajadoras en las cuestiones de riesgo químico en el lugar de trabajo. Establece además las normas para el etiquetado y para las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) de los productos químicos.

En la *“Encuesta sobre condiciones de trabajo, salud y seguridad laboral en Uruguay”*¹⁰ realizada en 2013, llama la atención sin embargo la baja cantidad de encuestados que manifestaron estar expuestos a riesgos químicos en su lugar de trabajo. Según esta encuesta, de los que reconocen estar en expuestos, 14% dicen desconocer los posibles efectos perjudiciales para la salud de la exposición a las sustancias peligrosas, 22,6% si solo se consideran los sectores de agricultura, ganadería, pesca y minería. Aproximadamente, uno de cada dos trabajadores dice disponer de equipos de protección, distribuyéndose los restantes entre la ausencia de dichos equipos (16,30%) y el desconocimiento (33,70%). (Martínez, 2013)

Además del proyecto de Sustainlabour, en 2009 se estaban desarrollando otros tres proyectos en el contexto de SAICM financiados a través del Fondo Fiduciario del QSP: a) *“Campaña integral regional para la minimización de fuentes domésticas de mercurio”*, iniciativa de la sociedad civil; b) *“Gestión*

¹⁰ Encuesta realizada por la Universidad de la República del Uruguay y la Universidad Rey Juan Carlos, con la colaboración del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay, y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS). Financiada por la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID),

racional de productos con mercurio”, de carácter nacional, con apoyo de ONUDI; c) “Gestión racional de teléfonos móviles que contienen plomo, cadmio, cromo hexavalente, PCB, PBDE”. Así como el proyecto; d) “Sistema de Clasificación y Etiquetado de Sustancias Químicas”, de carácter nacional, con apoyo de UNITAR/OIT.

Por otra parte, el Uruguay es signatario de la mayoría de los acuerdos ambientales internacionales, así como acuerdos y convenciones relativos a la gestión de sustancias químicas¹¹ y convenciones de la OIT sobre distintos aspectos vinculados a la salud y seguridad laboral¹². A 2014 se ha agregado la ratificación del Convenio sobre seguridad y salud en las minas (C176), en junio de 2014.

Salud y seguridad: el riesgo químico en el puesto de trabajo

A pesar de las diferentes situaciones económicas y sociales, en los seis países hay grandes desafíos en materia de salud y seguridad laboral. La primera de las dificultades es la falta de registro, debida en gran medida a la baja cobertura de los sistemas de protección de la salud de las y los trabajadores. En muchos casos hay también escasez de recursos financieros o humanos para llevar adelante los debidos controles en las empresas. En general el tema ha estado hasta hace pocos años completamente ausente en las agendas políticas y sociales, algo que comienza a revertirse tímidamente en los últimos años. (OISS, 2013)

En **Brasil**, el Ministerio de Trabajo y Empleo (MTE) da cuenta de casi 400.000 accidentes laborales por año, pero reconoce que en sus estadísticas hay una subestimación significativa ya que solo reflejan a la población cubierta por el Seguro Social (INSS). (MTE, 2012). En cuanto a intoxicación no intencional

¹¹ Convención de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP). Ratificada (2004); Convención de Róterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Previo Informado para el Comercio Internacional de Determinadas Sustancias Peligrosas. Ratificada (2003); Convención de Basilea sobre el Control de Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Eliminación. Ratificada (1991). Convenio de Minamata sobre el Mercurio. Ratificada (2014).

¹² C115: Convenio sobre la protección contra las radiaciones; C120: Convenio sobre la higiene (comercio y oficinas); C139: Convenio sobre el cáncer profesional; C148: Convenio sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del aire, ruido y vibraciones); C155: Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores; C161: Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo; C162: Convenio sobre el asbesto; C167: Convenio sobre seguridad y salud en la construcción; C184: Convenio sobre la seguridad y la salud en la agricultura.

con agrotóxicos, un estudio de la Universidad Federal de Bahía (UFFBA) relevó entre 2000 y 2008 un total de 1.669 muertes. El estudio llama la atención sobre los niveles de subregistro en el sector, que alcanzarían al 91,6%. (UFBA, 2012). Haciendo una proyección a la totalidad de la PEA, el MTE estima que los costos en salud laboral dan cuenta de entre el 2 y el 4% del PIB. (MTE, 2012)

Además de la falta de cobertura y de que muchos de los accidentes no se denuncian, hay un ocultamiento de las causas reales de los accidentes: en muchos casos donde hay responsabilidad del empleador, o donde se hace evidente la precariedad de las condiciones laborales, éstos se informan como accidentes de transporte o se completan mal los informes. (UFBA, 2011)

Según datos de las propias aseguradoras de riesgo laboral, en **Chile** los trabajadores están cubiertos en más del 85% por los sistemas de seguro (Gobierno de Chile, 2012) (Banco Mundial, 2014). Las empresas tienen obligación de informar de accidentes y enfermedades laborales desde 2007. Basados en estos reportes, las estadísticas oficiales indicaron en 2011 más de 225.000 trabajadores sufrieron accidentes en el lugar de trabajo (Gobierno de Chile, 2012), y 324 murieron en su propio lugar de trabajo (Zaldívar, 2013). Sin embargo, los formularios de reporte no requieren indicar las causas y, de hecho, una muy baja proporción de los accidentes lo indica. (Urzúa, 2010) Tomando la información disponible, 4,5% de las muertes en el lugar de trabajo y 10% de los accidentes graves se produjo por inhalación de gases tóxicos. (Gobierno de Chile, 2012)

Entre los años 2000 y 2004, se registró en **El Salvador** un promedio de 828 accidentes laborales por año, aunque el Ministerio de Trabajo no tiene registro de las causas. A pesar de la poca o nula información sobre la carga de accidentes o enfermedad atribuible a las sustancias peligrosas en el lugar de trabajo, el hecho de que 20% de los trabajadores declare trabajar en contacto directo con sustancias químicas, la mayoría de ellos sin equipos de protección, induciría a pensar que muchos de los accidentes y enfermedades profesionales están relacionados con esta circunstancia.

Los recursos con los que cuenta el Ministerio de Trabajo para vigilar el cumplimiento de las

obligaciones preventivas por parte de las empresas, es bastante insuficiente: el país cuenta con 74 Inspectores de Trabajo, de los cuales solo 5 están especializados en higiene ocupacional. La creación de Comisiones de Salud y Seguridad en el Trabajo en las empresas como resultado de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en 2012 es una oportunidad para mejorar en este sentido. Al momento de cierre del proyecto, casi 4.500 de las 6.000 empresas que están contempladas por la Ley estaban creando sus Comisiones de Salud y Seguridad.

Como se vio, en **Nicaragua** la mayor parte de los trabajadores carece de protección social y sanitaria relacionada con los daños de origen laboral y no es objeto de ningún tipo de acción preventiva sobre sus condiciones de trabajo. Esto incluye la exposición al riesgo químico.

Solo entre los asegurados del Instituto de Seguridad Social se registraron en 2011 casi 30.000 accidentes laborales y algo más de 500 enfermedades profesionales, una cifra muy subvalorada puesto que solo el 20% de los trabajadores está asegurado, quedando fuera del registro el resto de los trabajadores formales y la totalidad de los trabajadores informales. Los datos tampoco identifican los accidentes o enfermedades originados por la exposición a sustancias químicas. En particular, no incluyen a los trabajadores rurales, quienes probablemente se encuentren entre los más expuestos a riesgos químicos en su trabajo.

La administración laboral está haciendo esfuerzos por promover políticas de salud laboral más activas e inclusivas, sin embargo los recursos son bien escasos: el Ministerio de Trabajo sólo cuenta con 31 inspectores especializados en temas de salud y seguridad en el trabajo, lo que da una relación de 1 inspector cada 34.000 trabajadores.

En la **República Dominicana**, según datos del Ministerio de Trabajo se registra cada año un aumento del 20% en el total de los accidentes laborales, aunque se estima que solo se informan y registran la mitad. Para el caso de las enfermedades profesionales el subregistro alcanzaría el 90%. (Sustainlabour, 2012c)

Aunque el país cuenta con un marco regulatorio importante en materia de salud laboral, hay un bajo nivel de cumplimiento por parte de las empresas y una baja capacidad del Ministerio de Trabajo para

actuar. De los 200 Inspectores de Trabajo, solo 13 están especializados en salud laboral, lo que equivale a un Inspector por cada 20.000 trabajadores. (Sustainlabour, 2012c)

En **Uruguay**, la mayoría de la población trabajadora está cubierta por el Banco de Seguro del Estado (BSE). En 2013 se registraron unos 54.000 accidentes laborales, una cifra que se mantiene más o menos estable desde 2011 y que responde a un 10% de los trabajadores asegurados (INE, 2013). Según datos compilados por la OISS, de los casi 54.000 accidentes registrados en 2011, 53 resultaron en muerte del trabajador y 524 en incapacidad permanente. (OISS, 2012a)

La mencionada encuesta sobre condiciones laborales en el Uruguay concluye que 6,6% de la población trabajadora entrevistada sufrió algún accidente laboral que requirió asistencia médica o tratamiento entre 2010 y 2012; y 16% habían sido diagnosticados con alguna enfermedad profesional. Esta encuesta revela entre otros datos que 35% de las y los trabajadores creen que su salud se ve en riesgo en alguna medida en relación con la actividad laboral que desempeñan, entre otras razones por la posibilidad de accidentes y la exposición a sustancias peligrosas. (Martínez, 2013)

Hora de luchar contra la contaminación ambiental

En los seis países se registran dolorosos casos de contaminación ambiental que han tenido consecuencias graves no solo para la salud de los ecosistemas sino para la salud de comunidades enteras que se han visto seriamente afectadas. Además de la violación de derechos y la injusticia social y ambiental que esto representa, como ya se mencionó en páginas anteriores la región carga con costes sociales importantes y una significativa pérdida de productividad como consecuencia de la contaminación química ambiental. (PNUMA, 2013)

Solo a modo de ejemplo, se pueden citar casos de contaminación por plomo en el barrio de La Teja en Montevideo, en el Sitio El Niño en San Salvador, o los Bajos de Haina en República Dominicana.

Otro asunto de enorme preocupación es la contaminación de aguas superficiales y subterráneas por plaguicidas, en particular en poblaciones rurales con bajo nivel de cobertura de

agua potable en las que los hogares, en general, toman el agua de pozos. La exposición a plaguicidas constituye un serio riesgo para la salud, entre otras dolencias se encuentran las enfermedades renales crónicas y la falla renal como causa de muerte (OMS, 2013a).

Desde el año 2000 hasta 2012, en la región del Pacífico de América Central, se han producido más de 24.000 muertes por Insuficiencia Renal Crónica, la mayor parte de ellas en Nicaragua y El Salvador (Sustainlabour, 2012b). Justamente en los últimos años las autoridades locales y sanitarias de El Salvador denuncian la multiplicación de muertes por fallas renales, en especial en sitios cercanos a donde se realizan fumigaciones aéreas y donde existen depósitos obsoletos de plaguicidas¹³. Según datos de la OMS, 6 de cada 10.000 personas murieron en El Salvador por falla renal en 2009, antes incluso de la crisis reciente. Le seguía en gravedad Nicaragua, que pasó de 466 muertes anuales por insuficiencia renal crónica en el año 2000 a 1.047 muertes en 2010. (OPS, 2014)

En Brasil, la contaminación por mercurio en áreas de Amazonia como consecuencia de la extracción de oro, principalmente por minería artesanal y de pequeña escala, continúa siendo fuente de contaminación de recursos hídricos, peces y poblaciones ribereñas. Constituye también un factor importante de contaminación en los grandes polos industriales del sur del país, fundamentalmente por emisiones a la atmósfera.

Aunque hay un nivel importante de subestimación, el Ministerio de Medio Ambiente de Brasil hace un seguimiento de los accidentes que involucran sustancias químicas. En su portal de “emergencias ambientales”, da cuenta de 900 accidentes químicos sólo en el año 2010. De ellos, 600 se habrían producido en la etapa de transporte por carreteras, y unos 100 en la industria.

En Chile, segundo productor mundial de salmón en 2008, el uso indebido de distintas sustancias químicas para controlar la sanidad en la salmonicultura en el sur del país produjo serios problemas de contaminación marina que afectaron no solo la producción de salmón (que cayó

estrepitosamente y dejó sin empleo a más de 20.000 trabajadores y trabajadoras), sino que produjo también serios impactos en los ecosistemas marinos, comprometiendo los medios de vida de comunidades enteras de pescadores artesanales.

Recuadro 1: Tres casos emblemáticos de contaminación por plomo. Uruguay, República Dominicana y El Salvador.

La Teja – Montevideo: En Enero de 2001 se comenzaron a detectar los primeros casos de niños contaminados por plomo en el barrio La Teja. Las familias afectadas residían en su mayoría en asentamientos donde antes funcionaban plantas metalúrgicas con cuyos desechos se rellenaron los terrenos (Burger, 2010). Las familias comenzaron a relocalizarse en 2002 y, desde entonces, se vienen implementando distintas medidas de control y seguimiento. A principios de 2012 había en marcha 90 reclamos judiciales de afectados contra el Estado, por US\$ 90 millones¹⁴.

“El Niño”, El Salvador: Sitio contaminado con metales pesados, especialmente plomo. Se trata del lugar donde estuvo instalada una fábrica de baterías que durante años vertió sin ningún control todo tipo de residuos y metales pesados. Actualmente, el lugar está declarado inhabitable y ya se han detectado 247 niños contaminados por plomo. La población ha tenido que ser desplazada del lugar, asumiendo el Estado su manutención, vivienda y atención sanitaria. (Sustainlabour, 2012a)

Bajos de Haina, República Dominicana: Haina, comunidad cercana a una planta abandonada de reciclado de baterías ácidas de plomo. Estudios realizados en 1997 mostraron que más del 90% de la población (30.000 personas) tenía niveles de plomo en sangre por encima de los niveles tolerables¹⁵. Al menos 28% de los niños y niñas requería tratamiento urgente y más del 5% presentaban daños neurológicos severos e irreversibles. Las familias fueron relocalizadas y tras rehabilitar la zona se está construyendo un parque en el lugar. (Blacksmith Institute, 2014)

¹³ Denuncias públicas de las autoridades de San Luis Tapia recogidas en medios nacionales y en la Conferencia Nacional de Seguridad Química (agosto de 2013). Informes e intervenciones del Ministerio de Salud.

¹⁴ EL País, 17 de agosto de 2014. “El plomo dejó su herencia maldita”. <http://www.elpais.com.uy/informacion/plomo-dejo-herencia-maldita-jovenes.html>

¹⁵ Se encontraron niveles superiores a 70 µg/dl.

c. Distintas estrategias para distintos contextos

Aunque con objetivos y formatos similares, los proyectos tuvieron contextos muy diferentes de acuerdo a realidades nacionales muy heterogéneas, por las características propias de cada país, pero principalmente por las distintas capacidades técnicas e institucionales tanto a nivel de las organizaciones sindicales como de las propias instancias gubernamentales. Este hecho requirió realizar algunos ajustes en cronograma y actividades, así como la adopción de estrategias específicas para cada país.

En el caso de **Brasil y Uruguay**, con capacidades técnicas y antecedentes importantes en materia de gestión de químicos y, además, en áreas clave como protección ambiental, y salud y seguridad laboral; existencia de mecanismos de participación y diálogo con los distintos actores del diálogo social; y con organizaciones sindicales sólidas; la estrategia se enfocó en fortalecer los espacios de diálogo y las instancias sindicales ya existentes para la lograr una mayor integración de los temas de seguridad química en las respectivas agendas.

En **Chile**, un Plan de Seguridad Química en desarrollo, pero con deficiencias importantes en la normativa laboral; limitada participación de la sociedad civil en espacios de diálogo; fuerte presencia de la tercerización en sectores clave como minería o petróleo; y una mayor debilidad de las organizaciones de trabajadores, entre otros factores. En este caso, se buscó prioritariamente iniciar el diálogo con las instancias gubernamentales con responsabilidad en el área a fin de abrir canales de participación, y promover espacios de sensibilización, formación e intercambio de experiencias sindicales en temas de salud y seguridad laboral, protección ambiental, y seguridad química con diversos sectores.

Para el caso de **El Salvador, Nicaragua y la República Dominicana**, los niveles de informalidad, precariedad laboral y pobreza, así como las debilidades de las instancias gubernamentales para el control e implementación de normativa, eran más importantes que en los tres países del Cono Sur de América Latina: falta de estructura y recursos humanos, presupuesto insuficiente, falta de mecanismos para el cumplimiento de la ley, superposición de competencias, falta de voluntad política, etc.

Asimismo, la dimensión laboral estaba completamente ausente en las políticas y programas de químicos, y no había participación de las organizaciones sindicales en ninguna de las experiencias de diálogo sobre el tema. Las capacidades sindicales y de la sociedad civil en general eran muy limitadas. En el caso de los sindicatos debido a un bajo nivel de sindicalización y una muy fuerte fragmentación en multiplicidad de organizaciones, algunas muy pequeñas, con limitada o casi nula capacidad de incidencia.

Se decidió, por un lado, trabajar de manera conjunta con distintas centrales o confederaciones sindicales procurando avanzar en posibles líneas de acción conjunta; proveer de herramientas que pudieran resultar útiles tanto nivel sindical como gubernamental; facilitar canales de diálogo sindicatos-gobierno; y brindar espacios de formación diferenciados: una formación general básica, y una formación en profundidad para un grupo limitado de dirigentes sindicales. Dado el enorme peso de la informalidad, se decidió también incluir a sectores tradicionalmente informales como vendedores ambulantes, trabajadores/as del hogar y recuperadores/as de residuos.

Esta heterogeneidad se vio reflejada también en los resultados de los proyectos en cada uno de los países, con alcance e impactos diferenciados en función de los respectivos contextos nacionales, capacidades sindicales e institucionales. A pesar de esta heterogeneidad de resultados, como se puede ver en la sección siguiente, se considera que en todos los casos el proyecto ha representado un aporte importante para avanzar hacia una mejor gestión de las sustancias químicas a nivel nacional y de los puestos de trabajo.

4. Principales resultados de los proyectos

En esta sección se presentan los principales resultados de los proyectos de acuerdo con la evaluación realizada al finalizar los mismos. Los impactos para el fortalecimiento de las organizaciones y agendas sindicales fueron muy significativos¹, formando a un gran número de representantes en un manejo seguro de sustancia químicas, pero también generando responsabilidades y estructuras sindicales, para su seguimiento en el tiempo. Estas estructuras se han establecido a veces a nivel central o sectorial, pero otras ocasiones han tenido un carácter multi-central, es decir los diferentes sindicatos han establecido comités de coordinación y seguimiento en riesgo químico.

Cabe destacar que el fortalecimiento de las organizaciones sindicales y el hecho de que estos temas se hayan instalado en sus programas y planes de acción tuvieron un impacto directo en los resultados que aquí se presentan. El involucramiento y compromiso de las organizaciones que participaron en los proyectos fue clave para poder cumplir con las metas y objetivos de los mismos.

Estas estructuras sindicales creadas, y la incorporación de los temas a sus planes de acción, son las garantías fundamentales de la sostenibilidad del trabajo hecho en los diferentes países.

Consideramos además importantes los aportes de los proyectos para motivar una mayor participación y articulación de la sociedad civil en torno a estos temas. Los proyectos contribuyeron a sensibilizar y difundir al público en general sobre la importancia de avanzar hacia la gestión racional de las sustancias químicas, y brindaron formación específica a los trabajadores sobre temas de riesgo químico, obteniéndose algunos resultados concretos a nivel sectorial y de los puestos de trabajo.

¹ Para más información sobre los impactos en el fortalecimiento de estructuras y agendas sindicales se pueden consultar los informes de resultados en <http://sustainlabour.org/programas.php?lang=EN&idprograma=9>

A lo largo de esta sección se incluyen recuadros en los que se destacan algunos resultados concretos en los distintos países. Estas informaciones han sido actualizadas para la realización del presente documento mediante entrevistas con algunos de los actores involucrados para poder tener una mejor valoración de su impacto².

a. Beneficiarios directos e indirectos

Participación en actividades del proyecto

El interés que los proyectos despertaron entre trabajadores y trabajadoras superó ampliamente las expectativas de las organizaciones involucradas en su implementación. Las organizaciones sindicales nacionales imaginaban al inicio de los proyectos que el tema sería percibido por sus miembros como un asunto de interés marginal. Así, en ambos proyectos, se superaron en mucho las previsiones y metas previstas: de un total esperado de 400 a 500 participantes en las distintas actividades del proyecto, se llegó a 1.546 participantes, de los cuales el 30% fueron mujeres³. La posibilidad de ampliar el alcance fue en gran medida por la multiplicación de actividades formativas que realizaron, con recursos propios, las organizaciones involucradas. A día de hoy, algunas de ellas continúan replicando las formaciones en Uruguay, El Salvador y República Dominicana.

² Entrevistas telefónicas y por medio de correo electrónico realizadas en agosto de 2014.

³ Desde la propia organización de las actividades se trabajó con una meta de 25 a 30% de participación femenina. Ésta meta fue alcanzada en ambos proyectos. Sin embargo, en algunas de las actividades fue marcadamente superior al 30%, y en otras, inferior. Esto se explica por las características de las distintas actividades, y la mayor o menor participación femenina en determinadas ramas de actividad como, por ejemplo, minería o metalurgia en contraste con trabajadoras domésticas o de la administración pública.

De la totalidad de los beneficiarios directos de los proyectos, el 81% (1254 personas) participaron en actividades de formación. El resto de las actividades en el terreno incluyeron: Conferencias Multipartitas en El Salvador y República Dominicana, un proyecto piloto con recuperadores de residuos en República Dominicana, y una Conferencia Internacional Tripartita en Brasil.

Los participantes provinieron de algunos de los sectores más críticos en términos de riesgo químico: agricultura, industria química y farmacéutica, papeleras, curtiembres, piscicultura, industria del caucho, fábricas de plástico, puertos y aeropuertos, limpieza, comercio, salud, maquilas, metalúrgica, minería, administración pública, vendedores informales, recuperadores de residuos y reciclaje, entre otros.

Recuadro 2: Trabajar con los sectores más vulnerables

En ambos proyectos se trabajó con una diversidad de sectores basado en un doble criterio: el nivel de exposición de trabajadores o comunidades por las características propias de la actividad en relación con el riesgo químico; y la capacidad o nivel de protección de las y los trabajadores frente a esa exposición. La combinación de estos dos aspectos es un indicativo de la vulnerabilidad de un sector o de un grupo social frente a los riesgos químicos.

Entre estos grupos pueden contarse, en líneas generales, las y los trabajadores agrícolas, trabajadores informales de los diversos sectores, trabajadores tercerizados de la industria petrolera o minera, trabajadoras precarizadas de las maquilas, etc. Con diferencias en los niveles de protección y en el peso de algunos sectores, ésta es una realidad presente en los seis países donde se implementaron los proyectos.

Partiendo de este análisis, en la República Dominicana se realizó un trabajo específico de sensibilización, formación y fortalecimiento de uno de los grupos más vulnerables: **los recuperadores y recuperadoras de residuos**. La selección del sector se realizó en base a su vulnerabilidad y a la propia demanda de algunas asociaciones de recuperadores que vienen fortaleciendo su articulación con el

movimiento sindical del país.

Estos grupos de trabajadores y trabajadoras son de por sí grupos socialmente vulnerables, con alta proporción de mujeres trabajadoras, adultos mayores, y trabajo juvenil e infantil; están expuestos a una combinación de riesgos físicos, químicos, psicosociales; las condiciones laborales y de salubridad son deplorables, aún en casos de vertederos municipales y asociaciones reconocidas oficialmente; no existe ningún tipo de seguridad social; los niveles de organización son muy bajos, por lo que su capacidad de incidencia en la políticas públicas o para mejorar sus condiciones laborales son mínimas.

Además, en los vertederos en los que se trabajó (entre los más grandes de República Dominicana) los residuos industriales o patológicos llegan junto con los domiciliarios, sin separarse o tratarse previamente. Son frecuentes los accidentes, intoxicaciones, enfermedades, heridas graves y muertes entre las y los trabajadores del sector. En muchos casos la exposición a sustancias peligrosas y a los propios lixiviados ha tenido un papel protagónico.

En este sentido el proyecto trabajó de manera conjunta con las organizaciones sindicales y con asociaciones de recuperadores y recicladores de residuos, tanto de los que trabajan en las calles como los que trabajan en vertedero. Entre otros logros, se consiguió la participación de las asociaciones de recuperadores en la Mesa Nacional de Residuos, se establecieron alianzas con organizaciones sindicales para avanzar en proyectos piloto de separación en origen, y se avanzó en la discusión de mejoras en condiciones básicas de salubridad junto con los municipios responsables de los vertederos, como la construcción de instalaciones sanitarias y de lugares adecuados para el aseo y la alimentación.

Fuente: Informe final de actividad de Sustainlabour (2013)

Siendo proyectos dirigidos prioritariamente a trabajadores y sindicatos, la mayoría de los participantes provinieron de este tipo de organización (85% en promedio de los dos proyectos). Sin embargo, entre los objetivos se

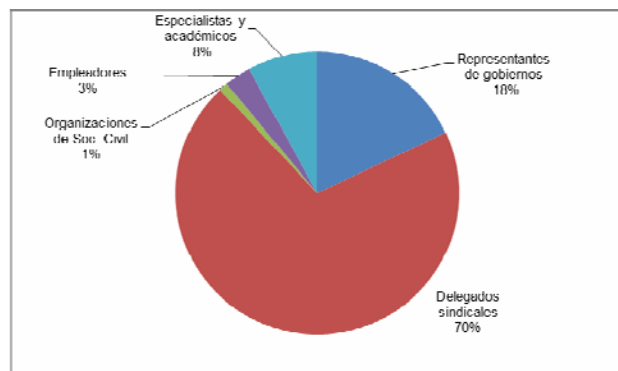
encontraba el mejorar el diálogo con los demás actores de interés, por lo que las actividades procuraron también involucrar a representantes de otras organizaciones como ONGs, asociaciones empresariales, instituciones académicas y de investigación, y representantes gubernamentales de distinto nivel.

Esta participación se dio fundamentalmente a través de Conferencias Multipartitas y Tripartitas, pero también en colaboraciones concretas para la elaboración de materiales, participación como expositores en actividades formativas, etc. Se logró con mayor o menor éxito en los distintos países.

En los países de Cono Sur de América Latina se logró la mayor participación de representantes no sindicales, fundamentalmente a través de la Conferencia Internacional Tripartita realizada en San Pablo con participantes sindicales y gubernamentales de Brasil, Chile y Uruguay, además de nutrida participación de instituciones académicas y organizaciones de empleadores en Brasil. Esta mayor participación de otros actores tiene probablemente relación con la mayor madurez del diálogo social en estos países, en particular en Brasil y Uruguay.

Gráfico 4: Proporción de participantes por perfil (%)

Brasil, Chile, Uruguay



Fuente: Informe final de actividad. Sustainlabour.

Difusión y comunicación

Además de la participación directa en las actividades de los proyectos, se realizó un trabajo de difusión y comunicación masivo a través de distintos instrumentos, como la impresión y distribución de materiales formativos, de informes de diagnóstico, y de folletos y afiches de sensibilización. Junto con ello, se utilizaron las redes y medios electrónicos de

distribución tanto de Sustainlabour como de otras organizaciones que llegaron a decenas de miles de personas con artículos e información de interés. Los proyectos y sus resultados fueron presentados en diversos eventos internacionales⁴.

Tabla 4: Cantidad y tipo de materiales de difusión y campaña

Material	Estimated Quantity
Material de campaña: folletos sectoriales (Brasil, Chile y Uruguay)	53.000 folletos impresos y distribuidos
Material de campaña: folletos y afiches sobre pesticidas (El Salvador y Rep. Dominicana)	15.000 folletos impresos y distribuidos
Campañas en prensa escrita y radial (El Salvador)	1.200.000 receptores de radio 150.000 lectores de prensa escrita

Fuente: informes finales de actividad. Sustainlabour.

En particular en El Salvador, que atravesaba una crisis por contaminación con pesticidas al momento del proyecto, se realizaron campañas masivas mediante comunicados en radios y periódicos de alcance nacional.

Alcance y capilaridad

Más allá de la participación directa en actividades de los proyectos, y de la masividad de las acciones de difusión y comunicación, las características y representatividad de las organizaciones sindicales involucradas debe tomarse en consideración a la hora de evaluar el potencial de alcance y sostenibilidad de los proyectos.

En general, se puede afirmar que las organizaciones sindicales poseen vastas redes de comunicación y una importante capilaridad que, en principio, permitiría llegar a un número mucho

⁴ ICCM2 (2009); II Asamblea Sindical de América Latina y el Caribe sobre Trabajo y Ambiente (abril 2009); Reunión sobre Trabajo Decente y Desarrollo Sustentable (ACTRAV/OIT, marzo 2010); Reunión Regional de ICEM (junio 2010); Seminario Andino sobre Riesgo Químico (julio 2010); Asamblea Sindical Africana sobre Trabajo y Ambiente (abril, 2010); Sesión de información del QSP de SAICM (noviembre, 2011); II Asamblea Sindical Mundial (junio 2012); ICCM 3 (septiembre 2012), entre otros.

mayor de beneficiarios, con posibilidades concretas de multiplicación a nivel de distintos sectores, áreas geográficas y grupos sociales especialmente vulnerables. Aunque la relación no es directa, ya que la capacidad y representatividad de las organizaciones depende de una multiplicidad de factores y no simplemente de su cantidad de miembros; los datos de afiliación pueden dar una idea del potencial de alcance de las mismas.

En este sentido, las organizaciones participantes en el primer proyecto tienen una muy amplia cobertura en el territorio nacional y tienen importantes capacidades técnicas y organizativas, en especial en los casos de Brasil y Uruguay. En su conjunto tienen 9 millones de miembros de los más diversos sectores y regiones del país.

Como se mencionó anteriormente, la sindicalización es en general mucho menor en América Central y el Caribe, además de la mayor fragmentación y precarización laboral. El conjunto de las organizaciones sindicales involucradas en el proyecto agrupa a 650.000 miembros.

b. Contribuir al avance de las agendas nacionales de químicos

Una de las primeras tareas que se encararon fue la recopilación de documentación e información disponible a nivel nacional y sectorial para tratar de identificar lagunas de información, capacidades y debilidades, tanto en el ámbito sindical como en el de la administración. La revisión de documentación disponible se complementó con entrevistas a dirigentes sindicales; autoridades nacionales de las áreas de salud, medio ambiente y trabajo; especialistas de universidades y centros de investigación; ONGs ambientalistas, etc. A partir de este trabajo de investigación se elaboró un **Informe Nacional** para cada país.

Además del diagnóstico inicial, los Informes Nacionales brindaron un nuevo enfoque que permitió incorporar y visibilizar los vínculos entre gestión segura de químicos, salud laboral, y condiciones de empleo y trabajo decente, algo que estaba virtualmente ausente en las agendas sindicales y de la administración. Este enfoque resulta particularmente importante para lograr la integración de los temas de riesgo químico en la agenda laboral.

Los Informes Nacionales representaron una contribución significativa para las áreas de gobierno

con responsabilidad en el tema, en particular en los países de América Central y el Caribe donde las debilidades institucionales son más marcadas. Son valiosos instrumentos para orientar las discusiones y agendas nacionales sobre este tema.

“Agradecemos al proyecto y a Sustainlabour por la elaboración del Informe Nacional. Es una excelente contribución que refleja la realidad de nuestro país y nos comprometemos a tomar en cuenta sus conclusiones en un ciento por ciento” (Sra. Lina Pohl, Viceministra del Ambiente El Salvador, San Salvador, Agosto 2013)

Por otra parte, los proyectos contribuyeron a las políticas nacionales al reforzar las líneas de acción referidas al fortalecimiento de la sociedad civil, en particular de las capacidades de las y los trabajadores, así como a reforzar la integración de los temas de salud y seguridad ocupacional en dichas políticas. Por ejemplo, la Política Nacional de Seguridad Química (PNSQ) en Chile⁵, la Política Nacional para la gestión de sustancias peligrosas de El Salvador⁶, o el Perfil Nacional de Sustancias Químicas en la República Dominicana.

Recuadro 3: Aportes al Perfil Nacional de la República Dominicana

El *Perfil Nacional sobre Sustancias Químicas y Residuos Peligrosos*⁷, publicado en 2013, fue elaborado durante el tiempo de implementación del proyecto, lo que permitió intervenir en el proceso mediante el contacto directo con las autoridades ambientales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Esto brindó la oportunidad no solo de acceder a información actualizada sino aportar en su elaboración planteando las preocupaciones del mundo del trabajo.

Las principales conclusiones y recomendaciones del Informe Nacional producido por Sustainlabour fueron recogidas por el Perfil Nacional en sus diversas secciones. Las conclusiones del perfil Nacional incorporan acciones prioritarias para el involucramiento de las y los trabajadores.

⁵ Política Nacional de Seguridad Química (PNSQ) http://www.sinia.cl/1292/articles-44404_PoliticaNacSegQuimica.pdf

⁶ Perfil Nacional para evaluar la Infraestructura Nacional para la Gestión de Sustancias Químicas en El Salvador. Propuesta para una Política de Gestión Ambientalmente Adecuada de los Materiales Peligrosos. 2010. http://www2.unitar.org/cwm/publications/cw/np/np_pdf/El_Salvad_or_National_Profile.pdf

⁷ Perfil Nacional de Sustancias Químicas y Residuos Peligrosos. 2013 <http://www.ambiente.gob.do/Ministerio/Gestion/ProyectoProgram>

Los proyectos tuvieron impacto también en la implementación de la normativa de Salud y Seguridad Laboral, este no es un hecho menor teniendo en cuenta las necesidades y brechas que aún enfrentan estos países. Por ejemplo, en Uruguay, contribuyó a ampliar las Comisiones de Seguridad y Salud en la empresa, algo que antes del proyecto era casi exclusivo de la industria química, y a colocar el tema de seguridad química en la pauta.

En El Salvador el proyecto coincidió con la puesta en marcha de la nueva Ley de Riesgos Laborales, que establece la conformación de Comisiones de Salud y Seguridad en la empresa con la participación de representantes de los trabajadores. El proyecto contribuyó con este proceso brindando herramientas que permitirán incluir los temas de riesgo químico a medida que se vayan conformando estas Comisiones.

Un componente importante de las políticas y estrategias de químicos suele ser la sensibilización, participación e involucramiento de los distintos actores y la sociedad en general. En ese sentido los proyectos hicieron un aporte importante para visibilizar la agenda de químicos a nivel del público general, trabajadores y sindicatos:

“...antes del proyecto solo quienes participaban directamente de la ICCM conocían sobre SAICM y los procesos de gestión de químicos. La Conferencia tripartita realizada en San Pablo brindó la oportunidad de compartir información con muchos otros actores interesados, nos solo sindicatos sino otros actores de la sociedad. El proyecto ha permitido que todas las instituciones que tienen alguna relación con el tema conozcan sobre estos procesos” (Fernando Vieira Sobrinho, Fundacentro/MTE. San Pablo, octubre de 2010)

c. Promover el diálogo

Los seis países atraviesan desde hace varias décadas diferentes procesos democráticos, y en los seis hay una cierta tradición de diálogo dentro de los estándares internacionales. Sin embargo, el grado de desarrollo de los procesos de diálogo social y las posibilidades y capacidades sindicales de intervenir son muy diferentes de uno a otro país. Las

principales deficiencias se pueden observar en Chile – donde la mayoría de las normas de OIT que garantizan la participación de los trabajadores no estaban ratificadas al momento de implementación del proyecto – o los países de América Central y el Caribe, con altos niveles de precariedad laboral y una fuerte fragmentación sindical que dificulta la participación de las y los trabajadores en los escasos espacios de participación disponibles.

Por ello, se observa que muchas veces las y los trabajadores están ausentes en el debate sobre medidas y políticas de gestión de sustancias químicas, aún en los casos donde existen instancias en las que podrían haber reclamado su participación.

En este sentido, ambos proyectos tuvieron una contribución significativa al mejorar o facilitar (en algunos casos inaugurar) el diálogo entre los distintos actores, aun en países donde podría suponerse altos niveles de diálogo y participación.

Así en **Brasil**, el proyecto impulsó la reactivación de la Comisión Nacional de Seguridad Química (CONASQ) cuyo trabajo había estado paralizado desde hacía tres años. En **Uruguay**, posibilitó el abrir el diálogo con distintas áreas del gobierno. En **Chile** permitió que los representantes sindicales se incorporen a la Comisión de Coordinación de la Política Nacional de Seguridad Química (PNSQ), la cual hasta el inicio del proyecto solo incluía a organismos gubernamentales, representantes del sector empresarial, ONGs e instituciones académicas.

Para alcanzar estos logros, fue clave la realización de la **Conferencia Regional Tripartita** a inicio del proyecto. La misma tuvo lugar en San Pablo, Brasil, y contó con participantes de los tres actores del diálogo social (empresa-gobierno-sindicato) de Brasil, y con representantes sindicales y gubernamentales de Chile y Uruguay, además de participantes de ONGs y de instituciones académicas brasileñas. Más allá del intercambio de puntos de vista y experiencias entre los distintos actores y diferentes países, la Conferencia permitió avanzar en acuerdos y compromisos de cooperación entre gobiernos y sindicatos que se plasmaron en la *“Carta de Principios y Directrices para promover la gestión racional y sostenible de sustancias químicas en el lugar de trabajo”*, que fue ampliamente divulgada, inclusive en la

[alnicioRapido/Proyecto%20Programa%20Inicio%20Rapido/2.4%20ONP_Dominican%20Republic.pdf](#)

segunda sesión de la Conferencia Internacional de Gestión de Químicos (ICCM2)⁸.

Recuadro 4: Reactivación de la Comisión Nacional de Seguridad Química de Brasil

La Comisión Nacional de Seguridad Química (CONASQ)⁹ es un espacio de diálogo creado en el año 2000 como mecanismo de articulación intersectorial para promover la adecuada gestión de las sustancias químicas. Busca crear oportunidades para el fortalecimiento, la divulgación y el desarrollo de acciones intersectoriales relacionadas con la seguridad química y la acompañar la implementación del Programa Nacional de Seguridad Química (PRONASQ).

Es presidida por el Ministerio de Medio Ambiente y tiene 22 miembros entre los que se cuentan instituciones públicas, ONGs, instituciones académicas, sector empresarial, y organizaciones de trabajadores.

La CONASQ retomó sus reuniones en agosto de 2009, luego de estar inactiva durante tres años. Su reactivación había sido uno de los compromisos asumidos por los representantes sindicales, empresariales y gubernamentales en el marco de la Conferencia Regional Tripartita realizada en San Pablo en abril de 2009.

Desde su reactivación, la CONASQ ha tenido 29 reuniones, además de la conformación de Grupos de Trabajo para dar seguimiento a temas específicos, como el Grupo para dar seguimiento a las negociaciones sobre Mercurio, y el Grupo de Trabajo sobre regulación de sustancias de uso industrial.

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente (MMA), agosto de 2014.

En el caso de los países de América Central y el Caribe, se realizaron **Conferencias Nacionales Multisectoriales** en El Salvador y en República Dominicana¹⁰. Participaron representantes de sindicatos, Gobierno, sector empresarial, ONGs,

⁸ SAICM/ICCM.2/INF/47- Disponible en http://www.saicm.org/images/saicm_documents/iccm/ICCM2/meeting%20documents/ICCM2%20INF47%20LAC%20unions%20S.pdf

⁹ Más información en <http://www.mma.gov.br/seguranca-quimica/comissao-nacional>

¹⁰ Se canceló la realización de una Conferencia en Nicaragua por considerarse que el proceso no estaba lo suficientemente maduro.

asociaciones, cooperativas, y universidades. Era la primera vez en que se desarrollaba un evento de estas características en el país, por lo que tuvieron un gran impacto político con amplia cobertura inclusive en medios periodísticos. Aunque no hay compromisos o decisiones vinculantes, las conclusiones de las Conferencias Multisectoriales marcan una interesante hoja de ruta tanto para las organizaciones sindicales como para el trabajo a futuro de los demás actores interesados, en particular ciertas áreas gubernamentales.

Igualmente destacable es la facilitación del diálogo entre organizaciones sindicales, en particular en El Salvador y República Dominicana, donde no hay tradición de trabajar en agendas comunes. En este sentido el proyecto permitió no solo generar espacios de diálogo sobre temas clave, sino que permitió dar visibilidad al movimiento sindical, con posiciones firmes de unidad, en temas acuciantes como por ejemplo la nueva legislación sobre plaguicidas en El Salvador, ante lo cual el movimiento sindical de manera unificada realizó conferencias, comunicados de prensa y spots radiales que tuvieron alcance nacional.

d. Fortalecer la organización sindical: capacidades y herramientas para la acción

El riesgo químico es un tema que en general preocupa a las y los trabajadores de los distintos sectores, puesto que son frecuentemente testigos de distintos problemas de salud y accidentes laborales vinculados con la exposición a sustancias químicas. Sin embargo, los temas de riesgo químico suelen ser marginales dentro de las agendas sindicales. Esto ocurre particularmente en países que presentan importantes déficits en cuanto a condiciones sociales y laborales, donde las organizaciones sindicales suelen priorizar las urgencias de la precariedad laboral, la informalidad y la falta de protección.

En el caso de los proyectos implementados por Sustainlabour, para la mayoría de las organizaciones sindicales que participaron en el proyecto la cuestión de la seguridad química no era un tema en el que se hubiese trabajado desde el sindicato. La única excepción la constituían las organizaciones sindicales de los

trabajadores de la industria química de Brasil y de Uruguay.

Un primer desafío lo constituía el visibilizar los vínculos entre precariedad laboral, salud, y la cuestión aparentemente marginal de las sustancias químicas; además, lograr que el tema se integrase a las agendas sindicales. En los países de América Central y Caribe, se presentaba el desafío adicional de la muy alta fragmentación sindical, por lo que debían, además, buscarse estrategias de coordinación que permitiesen encontrar puntos en común para posibilitar un mínimo de unidad de acción a nivel sectorial o nacional.

Para dar respuesta a estos desafíos se constituyeron **Grupos de Trabajo Sindicales** en cada uno de los países. Se formaron además estructuras de coordinación inter-sindical para facilitar el diálogo entre las distintas organizaciones, garantizar la coherencia al proceso y maximizar el impacto de los proyectos.

En muchas oportunidades las organizaciones sindicales cuentan con experiencias previas de trabajo colectivo con motivo de proyectos de cooperación o ante situaciones puntuales. Es frecuente que estos equipos de trabajo se desmovilicen una vez superada la situación que le dio origen, o al terminar un proyecto de cooperación (por reducirse los recursos o debilitarse la agenda). En esta oportunidad, en los casos en que fue posible se procuró recuperar la experiencia de trabajo previa, tal como ocurrió en Uruguay, donde se amplió y fortaleció una comisión ya existente para el tratamiento de temas de Salud, Seguridad y Ambiente. A cuatro años de cerrado el proyecto, el Grupo de Trabajo de Uruguay continúa trabajando y dando seguimiento al tema.

“El proyecto nos permitió reunir a sindicalistas de distintos sectores para discutir sobre un tema en común. Nos movilizamos para organizar los eventos, para preparar los materiales y para planificar las actividades que habíamos planificado. Le dimos prioridad al trabajo colectivo (...) los resultados del proyecto son un llamado a que este colectivo continúe su trabajo para seguir construyendo capacidad sindical y dar seguimiento a la política nacional de seguridad química”. Jorge Ramada, Coordinador de la Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente del PIT-CNT.

Los Grupos de Trabajo jugaron un papel importante para conseguir la **integración de la temática en la agenda sindical**. Con diferente nivel de consistencia, las distintas organizaciones sindicales lograron incluir en sus planes y estrategias de acción cuestiones relacionadas con la reducción del riesgo químico: desde resoluciones en Congresos y Asambleas, como es el caso de varias de las organizaciones de República Dominicana; la introducción del tema en espacios bipartitos y tripartitos existentes a instancia de las organizaciones sindicales en Uruguay, Brasil y República Dominicana; la constitución de una Comisión de Salud y Seguridad Laboral en Chile, creada a partir del Grupo de Trabajo nacional y que ha asumido el tema como parte de su agenda:

“A nivel de nuestra Central [CUT Chile] hemos comprendido la necesidad de que ésta sea una prioridad en nuestra agenda (...) los temas se han establecido y se están creando los espacios que nos permitirán dar un paso significativo hacia adelante con la constitución de la Comisión de Salud y Seguridad”. Luis Fuentealba, Secretario Nacional de Prevención de Riesgos, Salud, Ambiente y Energía de la CUT Chile.

Es importante destacar que el fortalecimiento de las organizaciones sindicales y el hecho de que estos temas se hayan instalado en sus programas y planes de acción tienen un impacto directo en la implementación de políticas nacionales y locales al permitir contar con una participación más cualificada en dichos procesos. La implementación de medidas gubernamentales para el control y regulación del uso de las sustancias químicas se verá probablemente favorecida al contar con las organizaciones de trabajadores como aliadas estratégicas en la lucha contra el riesgo químico.

Además, este involucramiento permite impulsar cambios concretos a nivel de los centros de trabajo mediante acciones e instrumentos propios del accionar sindical, como la negociación colectiva, la intervención en planes de acción de las Comisiones de Salud y Seguridad en el Trabajo en la empresa, el involucramiento de delegados ambientales en planes de gestión y evaluación de impactos, etc. Los avances legislativos que se están produciendo en los países de la región en salud laboral, con la obligatoriedad de la constitución de comisiones de salud laboral en los centros de trabajo

medianos y grandes, puede ser una gran oportunidad para reducir el riesgo químico, si se establecen planes de formación de los trabajadores en el manejo sostenible de sustancias químicas.

La **formación** y la provisión de **herramientas concretas** han sido elementos fundamentales para lograr la apropiación del tema por parte de las organizaciones sindicales y facilitar su actuación en los distintos niveles.

Como se mencionó en secciones previas, la demanda de formación, aunque era conocida, fue muy superior a lo esperado. El conocimiento con el que contaban los pocos trabajadores que alguna vez habían accedido a alguna formación en el tema era en general de tipo individual, en función del puesto y de la empresa en que desarrollaban su tarea, fundado fundamentalmente en capacitaciones profesionales brindadas por la misma empresa. Las únicas excepciones la constituían los sindicatos de la industria química de Brasil y Uruguay, donde había experiencia de negociación, participación en ámbitos del diálogo social, formación sindical, etc.

Como se dijo, la demanda superó completamente las previsiones y metas del proyecto: de un total esperado de 250 a 335 participantes en las actividades de formación, se llegó a 1.254 participantes. Parte de esta multiplicación de actividades formativas fue posible gracias al aporte de recursos adicionales por parte de las propias organizaciones involucradas.

Los participantes de las formaciones provinieron de los más variados sectores: minería, petróleo, trabajadoras domésticas, papeleras, fábricas químicas, metalúrgicas, agricultura, curtiembres, pescadores, plástico, etc. En el caso de El Salvador y República Dominicana hubo una muy fuerte presencia de sectores informales, algunos no sindicalizados, como asociaciones de recuperadores de residuos y cooperativas de mujeres.

Además, se elaboró para cada país una **Guía de Formación sobre Riesgo Químico**, dirigida especialmente a trabajadores y trabajadoras. Se distribuyeron cerca de 5.000 ejemplares impresos, y unos 20.000 por medios electrónicos. La Guía de formación fue utilizada en múltiples actividades realizadas con posterioridad al cierre de ambos proyectos.

Además del uso que continúan dándole las organizaciones sindicales se pueden destacar la reimpresión realizada por parte de la Facultad de Química y Farmacia Universidad de El Salvador, para su uso en distintos programas universitarios; y la utilización de la Guía por parte de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) en la República Dominicana como material de estudio en sus actividades de formación con trabajadores y trabajadoras.

e. Sensibilizar y difundir sobre los riesgos en sectores clave

Una de las dificultades para abordar el tema de la seguridad química con trabajadores y trabajadoras es la escasez de instrumentos de sensibilización en un lenguaje que sea accesible y que, aumentando el conocimiento y la conciencia sobre la gravedad de la problemática, genere acciones de cambio, sin provocar la desazón e impotencia que muchos trabajadores pueden sentir al tener que enfrentar una realidad que pone en cuestión las formas en que han trabajado y producido a lo largo de su vida.

Más allá de la participación y cualificación de las discusiones y políticas de seguridad química al incorporar la perspectiva laboral, una de las formas de favorecer la movilización hacia la acción y el cambio es el abordaje de las problemáticas con recortes sectoriales y a escalas que sean “manejables” para las y los trabajadores. Es a nivel sectorial y en los puestos de trabajo donde éstos y sus organizaciones tienen su campo de acción más concreto y donde pueden llevar a la realidad cambios de proceso con impactos positivos directos.

En este sentido, otras de las acciones clave de los proyectos fueron las **campañas sectoriales sobre riesgo químico**. En el caso de Brasil, Chile y Uruguay se produjeron nueve folletos sectoriales, tres por país, para algunos de los sectores claves en materia de riesgo químico, ya sea por el nivel de riesgo de la actividad o por la situación de vulnerabilidad de sus trabajadores: plástico, caucho y fertilizantes en Brasil; minería, salmonicultura y agricultura en Chile; y en Uruguay industria química, de pasta y papel y metalúrgica.

A partir de la premisa de que *no se puede combatir lo que no se conoce*, los folletos sectoriales tuvieron por objetivo informar,

sensibilizar y, además, difundir propuestas de acción para reducir el riesgo químico. Las propuestas abarcaron desde acciones concretas con respecto a normas, legislación y mecanismos de control, hasta demandas más generales sobre la participación de los trabajadores y el respeto a sus derechos.

En El Salvador y República Dominicana se realizó una **campaña de sensibilización centrada en el tema de plaguicidas**. Como se vio en secciones anteriores, éste es un tema crítico en los países del proyecto por el uso indiscriminado, la aplicación aérea en áreas cercanas a poblados y la existencia de depósitos obsoletos. Además, son países con una alta proporción de población rural dedicada a la actividad agrícola en condiciones serias de precariedad laboral, lo que dificulta aún más la protección de los trabajadores frente a los diversos riesgos laborales.

A los pocos días de lanzada la Campaña sobre plaguicidas en El Salvador el Parlamento prohibía gradualmente el uso de más de 50 plaguicidas por sus riesgos para la salud provocando la reacción de los grandes productores agrícolas. Frente a este contexto, el movimiento sindical tuvo una posición clara, firme y unificada apoyando la nueva Ley mediante distintas manifestaciones públicas: comunicados, conferencias de prensa, y anuncios radiales de alcance masivo.

Recuadro 5: El salvador, comunicado de las centrales sindicales sobre la Ley de Control de Plaguicidas



Ante el debate desatado en torno a las reformas a la **Ley sobre el Control de Pesticidas, Fertilizantes y Productos para uso Agropecuario** recientemente aprobadas por la Asamblea Legislativa, las organizaciones sindicales: Central Autónoma de Trabajadores Salvadoreños-CATS, Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de El Salvador-CSTS y Central de Trabajadores Democráticos-CTD, a las organizaciones sociales consecuentes, clase trabajadora y población general **MANIFESTAMOS:**

Nuestra solidaridad y compromiso con todas y todos los trabajadores rurales; así como con las comunidades que sufren los efectos de la utilización masiva de sustancias agroquímicas peligrosas en nuestro país.

Existen gran cantidad de estudios nacionales e internacionales que indican los graves daños que las sustancias químicas utilizadas en la agricultura pueden ocasionar a la salud no solo de trabajadores y trabajadoras, sino también comunidades cercanas a las áreas de fumigación y consumidores, en especial niños, niñas y mujeres.

En países en desarrollo como El Salvador, se estima que el 14% de las enfermedades y accidentes laborales, son ocasionadas por los productos químicos de uso agropecuario y 10% de las muertes están relacionadas con el trabajo. Además, es frecuente detectar residuos de estos productos en los alimentos que se comercializan y consumen diariamente en centros urbanos y poblados rurales.

No obstante que en nuestro país existe desde hace años, una normativa que regula y en algunos casos prohíbe el uso y comercialización de sustancias químicas de uso agropecuario consideradas altamente peligrosas. A pesar de ello, históricamente los intereses de grandes productores, latifundistas y multinacionales agroquímicas han pesado sobre la implementación de la Ley y dificultado los controles por parte de las autoridades competentes.

El sistema dominante de producción agropecuaria en nuestro país, basado en la importación y uso masivo de agroquímicos, ha posibilitado un crecimiento del sector agropecuario. Sin embargo, este crecimiento no ha sabido dar respuesta a los graves problemas que arrastra el país: pobreza, inseguridad alimentaria, precariedad laboral, expulsión de pobladores rurales, concentración de la tierra.

Son las y los trabajadores rurales, y los sectores más vulnerables de la sociedad civil, quienes históricamente hemos pagado este costo, en el deterioro de nuestra salud, condiciones laborales inaceptables, y daños ambientales que afectan directamente la salud y nuestros medios de vida.

Para ello es necesario realizar una profunda transformación del sistema de producción agropecuaria en nuestro país. Esta transformación debe garantizar la protección de los sectores más vulnerables, entre ellos las y los trabajadores agrícolas, para que no sean estos quienes continúen pagando los costos de un sistema orientado por los intereses de los más poderosos.

Por tanto estamos por la defensa de una política de Soberanía Alimentaria, que incluya entre sus principios el respeto al derecho a la salud y a un ambiente sano de las y los trabajadores rurales y sus comunidades. Asimismo deben incrementarse los esfuerzos para dar tratamiento a los Proyectos de Ley que se encuentran en la Asamblea Legislativa, a fin de garantizar el derecho a una alimentación sana y saludable de toda la población salvadoreña.

Reconocemos los esfuerzos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en su Programa de Agricultura Familiar. Señalamos sin embargo la necesidad de que dicho Programa se oriente hacia la promoción de prácticas agropecuarias sostenibles, respetuosas de la vida y la salud de las y los trabajadores, sus comunidades, y el medio ambiente.

Rechazamos de manera contundente los intentos por parte de los grupos económicos dominantes de nuestro país, de querer confundir y amedrentar a la población con informaciones alarmistas y sin sustento real.

Por todo ello, las organizaciones sindicales consecuentes manifestamos públicamente.

NUESTRO APOYO A LA PROHIBICIÓN GRADUAL DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS DE USO AGROPECUARIO APROBADA POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA EL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

Pedimos al Presidente de la República señor Mauricio Funes Cartagena, la aprobación definitiva e inmediata de esta ley.

San Salvador, 30 de septiembre del 2013.

Sustainlabour

f. Reducir el riesgo químico en el lugar de trabajo

Son múltiples las experiencias que las organizaciones participantes identifican como resultado directo o indirecto de los proyectos, en especial en lo que hace a una mayor presencia del tema en la agenda sindical, y a la multiplicación de acciones de sensibilización y formación a distinto nivel tomando como base las herramientas facilitadas por el proyecto.

Más difícil de acompañar son los impactos concretos que pueden haberse producido al interior de los puestos de trabajo. El hecho de haber llegado de manera directa a más de 1.500 personas, de 125 organizaciones sindicales diferentes que en su conjunto representan a 10 millones de trabajadores y trabajadoras, permite suponer que se ha podido generar una “masa crítica” de trabajadores y representantes sindicales con capacidad de convertirse en multiplicadores tanto al interior de sus organizaciones como en sus puestos de trabajo. Sin embargo, este mismo hecho hace difícil realizar un seguimiento exhaustivo de todos los impactos que los proyectos pueden haber tenido sobre las prácticas y procesos en los lugares de trabajo.

Basado en la evaluación que hacen las organizaciones involucradas en la implementación del proyecto se puede afirmar, sin embargo, que los proyectos han contribuido para que a nivel de los puestos de trabajo las organizaciones y representantes sindicales logren pasar de un enfoque centrado en la utilización de Equipos de Protección Personal (EPP) y remediación una vez ocurrido un daño, a un enfoque de prevención.

Debe tenerse en cuenta también que la posibilidad de lograr cambios concretos en el centro de trabajo depende en gran parte de la capacidad de diálogo de las organizaciones sindicales y sus delegados para acordar esos cambios con el empleador.

Una de las experiencias rescatadas por las organizaciones de la República Dominicana es la llevada a cabo en la metalúrgica METALDOM¹. Los

¹ METALDOM es una de las mayores metalúrgicas del país, con cerca de 1.000 trabajadores.

cambios propuestos representaron una mejora para las condiciones de salud de los trabajadores y redujeron la utilización de sustancias químicas con sus consecuentes desechos, pero también tuvieron un beneficio económico para la empresa.

Recuadro 6: La experiencia de METALDOM: sustitución, prevención e información. Ganancia para trabajadores y empresa

“En el pasado, en METALDOM utilizábamos un producto químico muy agresivo que se llama TALADRINA, el cual era utilizado para mantener húmedas y libre de óxido el trabajo que realizan unas máquinas, pero los trabajadores se veían obligados a entrar en contacto con dicho agente químico.

A raíz de la educación-conciencia que nos dejó el proyecto, conversamos con la empresa para que en conjunto se buscara una alternativa menos dañina. Por lo que acudimos a probar una alternativa ecológica (Grasa de Cerdos). En función de que nos ha dado resultados maravillosos (no tiene ni olor), hoy día estamos trabajando con este producto; además, con esta sustancia la empresa ha logrado un ahorro 75% frente a la Taladrina.

De igual manera, se prohibió al personal de limpieza que ligaran químicos, como por ejemplo: detergentes en polvo con cloro y desinfectantes; o cloro con desinfectantes, algo que era muy común hasta en nuestros hogares.

Dentro de la empresa hemos realizado una campaña para que todos los trabajadores puedan identificar cualquier sustancia, vía la simbología que identifica a los riesgos químicos.”

Fuente: entrevista con Ariel Acevedo, Secretario General del sindicato de Trabajadores metalúrgicos de METALDOM. 19 de agosto de 2014.

Otro ejemplo exitoso de sustitución es el que describen las representantes de la Cooperativa “Los Quimiquitos”, una de las organizaciones que ha participado en las distintas actividades del proyecto en la República Dominicana y que reconoce que como consecuencia del proceso de formación e intercambio propuesto por el proyecto han iniciado un proceso de sustitución en su sistema de producción:

"Somos un grupo de mujeres que producíamos productos de limpieza a partir de distintos productos sin ningún conocimiento sobre los efectos sobre nuestra salud o los efectos que estas sustancias podrían tener al combinarse. Gracias al proyecto nos capacitamos y descubrimos que nuestra forma de producir no era segura para nosotras, ni para los demás, y buscamos ayuda para poder cambiar. Ahora tenemos un proceso "verde", tenemos una certificación y estamos produciendo" (Viviana Mercedes de Jesús, trabajadora de "Los Quimiquitos". Santo Domingo, Agosto 2013)

Otra vía de acción concreta a nivel sectorial y de centros de trabajo lo constituye la inclusión de cláusulas relativas a la reducción del riesgo químico en convenios y negociación colectiva. Es el caso que informan, por ejemplo, la Federación de Trabajadores de la Industria de alimentos de la República Dominicana y varias de las organizaciones sindicales que participaron del proyecto en Uruguay.

5. Conclusiones

La implementación de los proyectos del QSP brindó la oportunidad de acompañar el proceso regional de crecimiento de la agenda de químicos durante los cuatro años en que se desarrolló este trabajo (2008 a 2010, y 2011 a 2013). Se presentan a continuación algunas de las “lecciones aprendidas”, así como una serie de propuestas y recomendaciones sindicales que fueron surgiendo a lo largo de la implementación de ambos proyectos, las cuales se esbozaron en las páginas anteriores:

a. Mejorar el conocimiento y la información

En el proceso de elaboración y discusión colectiva de los Informes Nacionales producidos por los proyectos se buscó identificar brechas, necesidades y capacidades para la gestión de las sustancias químicas en los distintos países cubiertos por los proyectos.

Como una primera conclusión, fue posible constatar que en los últimos años ha habido importantes avances en la región, en particular desde la adopción de SAICM y la implementación de diversos proyectos del QSP se ha avanzado en los seis países en la implementación y elaboración de distintos instrumentos como Perfiles Nacionales, Políticas de Gestión de sustancias químicas y de residuos peligrosos, etc.

Estos documentos recogen importante información nacional, fundamentalmente, identifican líneas prioritarias de acción, actores de interés, marco normativo y competencias de las distintas instituciones con responsabilidad en la materia. Sin embargo, se pudieron observar importantes deficiencias en cuanto a la información sobre contaminantes, y la falta de registros e inventarios actualizados. Los avances en este sentido son recientes y puntuales, en general relacionados con ciertas sustancias de interés especial como Mercurio o Contaminantes Orgánicos Persistentes.

Estudios internacionales como el Global Chemicals Outlook (GCO) aportan importantes contribuciones para la identificación de efectos de la contaminación química sobre los ecosistemas y las personas, sin embargo aún es muy escasa la información regional al respecto.

En este sentido, es fundamental avanzar en la investigación tanto de los contaminantes como de los efectos sobre la salud humana y ambiental. Ejemplos de contaminación con plomo o residuos de plaguicidas como los que se relatan en este documento salen a la luz cada día en los países de la región. Lamentablemente, los casos se hacen visibles a raíz de distintas crisis de salud pública cuando ya hay una carga de muertes y enfermedad importante o efectos irreversibles.

Sería necesario hacer estudios epidemiológicos para constatar la presencia y hacer seguimiento de enfermedades ambientales que puedan ser atribuibles a contaminación química, en especial en áreas industriales abandonadas, zonas rurales donde hay aplicación aérea de plaguicidas, y polos industriales en actividad.

b. Incorporar la dimensión de la salud y seguridad laboral

A pesar de que en algunos de los países las políticas y planes sobre gestión de sustancias químicas consideraban la salud y seguridad laboral entre sus prioridades, en todos ellos hay un vacío estadístico significativo, con niveles de sub-registro que hacen imposible valorar adecuadamente la situación. Este es uno de los grandes desafíos de la región y tiene relación directa con los niveles de precariedad laboral e informalidad. Los proyectos de Sustainlabour contribuyeron a sensibilizar a gobiernos y demás actores sobre los vínculos entre riesgo químico y condiciones laborales.

Para poder avanzar en este aspecto es imprescindible mejorar los sistemas de control y

registro de enfermedades y accidentes laborales. Esto incluye dotar de recursos financieros y técnicos a los organismos que tienen la responsabilidad de fiscalización, en particular cuerpos de inspectores laborales y médicos especializados.

Como se señaló, las leyes relativas a salud laboral obligan en casi todos los países a conformar Comisiones Bipartitas para tratar los temas de salud y seguridad laboral. Es necesario reforzar la capacidad de los miembros de dichas comisiones y de los representantes de los trabajadores en general para que incorporen el tema de los riesgos químicos en su agenda de trabajo, los países de la región deberían valorar la oportunidad que representa la formación de estas estructuras.

Así mismo, el tema de riesgo químico no suele estar integrado en las políticas de salud y seguridad laboral, ejemplo de ello es la virtual ausencia del tema en la Estrategia Iberoamericana de Salud y Seguridad en el Trabajo. Como se indicó, las organizaciones sindicales que participaron en el proyecto están precisamente señalando ese déficit en las discusiones previas a su aprobación.

A nivel nacional, el proyecto tuvo también impacto en ese sentido, por ejemplo a instancias del proyecto la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) de República Dominicana incorporó un módulo sobre riesgo químico en sus programas de formación.

c. Integrar agendas

A pesar de que se reconoce la gravedad del problema y la importancia de avanzar hacia la gestión racional de las sustancias químicas, este tema suele quedar relegado en las agendas políticas y sociales de la región. Al respecto, es necesario que los temas de riesgo químico se incorporen de una vez en las políticas sectoriales, estrategias de desarrollo, planes para la reducción de la pobreza, programas de Trabajo Decente, etc.

La falta de información sobre los efectos de la contaminación química sobre la salud y medios de vida de las personas tiene relación con esta dificultad de integrar agendas. Es necesario hacer más evidentes estos vínculos para que se comprendan las interacciones y posibles sinergias entre unas y otras.

Los estudios realizados por Sustainlabour en el marco de los proyectos buscaron precisamente contribuir con la identificación de los vínculos entre las condiciones laborales y la exposición a sustancias peligrosas.

Así mismo, una mejor comprensión de los costos de la inacción es clave para comprender la importancia de adoptar medidas y estrategias orientadas hacia la prevención. Como se describió en este documento, ya existen estudios que hacen una primera aproximación y valoración en términos de oportunidades perdidas y sobre costos adicionales de salud por agentes contaminantes, como por ejemplo el caso del plomo en niños menores de 5 años.

Un paso importante en el sentido de integrar agendas es la constitución en todos estos países de mecanismos de coordinación inter-ministerial para la implementación de las distintas políticas de químicos. En general estos espacios son presididos por los Ministerios de Medio Ambiente y el Ministerio de Trabajo se encuentra entre los miembros. Sin embargo, la participación de estos últimos no parece ser muy activa y la dimensión laboral parecería no estar demasiado presente en las discusiones.

d. Ampliar y fortalecer los mecanismos de participación

Además de la articulación de las distintas áreas de gobierno, para que la implementación de la gestión de las sustancias químicas sea exitosa se requiere la participación de todos los actores interesados: la industria, las instituciones académicas, ONGs, organizaciones de trabajadores, y demás grupos vulnerables.

En ese sentido la mayoría de los países ha establecido mecanismos de diálogo que incluyen la participación de estos distintos actores. Al momento de iniciar los proyectos algunos de estos mecanismos no contaban con la participación de representantes de trabajadores, y otros estaban inactivos desde hacía varios años.

El proyecto fue un agente movilizador en este sentido al promover y facilitar espacios de diálogo. En algunos casos esto resultó en la reactivación de Comisiones multisectoriales, como la CONASQ en

Brasil; o la incorporación de las organizaciones sindicales en procesos participativos, como la Coordinación para la implementación de la PNSQ en Chile.

Mejorar el acceso de la sociedad civil a la información es una condición para lograr una efectiva participación ciudadana en los procesos de gestión de sustancias químicas. Es necesario garantizar el derecho a la información, así como continuar reforzando las capacidades de los sindicatos y de los demás actores por medio de la formación y el fortalecimiento institucional para que puedan intervenir de manera cualificada en estos espacios y aportar desde su propia experiencia.

Igualmente importante es profundizar las campañas de sensibilización e información al público en general, tratando de manera específica los riesgos de la exposición de grupos vulnerables, en particular trabajadores precarizados e informales. Los proyectos hicieron una significativa contribución en este sentido, a través de herramientas concretas de difusión como afiches, folletos, anuncios radiales, etc. que tienen el potencial de llegar a millones de trabajadores y trabajadoras a través de las redes de comunicación y capilaridad de sus organizaciones.

Es necesario también continuar trabajando para que estos temas entren cada vez más en las agendas del diálogo social tripartito (gobierno–empleadores–sindicatos) y en instancias de negociación colectiva. Así como se necesita avanzar en los procesos de política nacional, es fundamental avanzar también con la agenda a nivel de los sectores y de los puestos de trabajo, es allí donde se pueden realizar acciones concretas con impactos directos en plazos relativamente cortos.

e. Buscar alternativas y soluciones

Ya existen experiencias exitosas de cambios en tecnología o sustitución de sustancias peligrosas por otras que representen menores riesgos para la salud de los trabajadores y el ambiente. Muchas veces esas innovaciones no llegan a conocimiento de las y los trabajadores o las empresas, o resultan difíciles de implementar por falta de capacidad técnica o por tratarse de costos elevados.

Las experiencias de sustitución que se han descrito en este informe, muestran sin embargo cómo trabajadores y empleadores pueden mejorar significativamente las condiciones de salud y seguridad con medidas relativamente sencillas generando inclusive beneficios económicos.

Deben fortalecerse las instituciones de investigación, centros universitarios, laboratorios, etc. a fin de brindar los medios para la investigación y desarrollo de soluciones y alternativas. Es necesario al mismo tiempo asegurar oportunidades de capacitación para los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, para la implementación de las nuevas tecnologías o procesos. En este sentido, es importante también mejorar los mecanismos de intercambio y de transferencia de conocimiento y tecnología Norte-Sur y Sur-Sur.

f. Asegurar la continuidad

La brecha entre los desafíos y las capacidades es enorme, en especial en países que aún enfrentan grandes déficits en derechos sociales, laborales y ambientales elementales. Es necesario redoblar los esfuerzos y garantizar la continuidad del apoyo técnico y financiero internacional para que el tema pueda ocupar un lugar más destacado en las agendas nacionales y locales.

Los riesgos químicos son numerosos, y cambian de manera rápida, no hay más que mirar el desarrollo de los riesgos de la industria electrónica o de los que pueden ser las nanotecnologías. La prevención y sustitución es posible, pero compleja en muchas ocasiones, por lo que su solución requiere de esfuerzos sostenidos. Mecanismos como el QSP de SAICM han mostrado ser muy efectivos y tener resultados satisfactorios.

Aunque hay soluciones locales e inmediatas, como la adopción de medidas concretas en centros de trabajo o sectores, la gestión de sustancias y desechos peligrosos requiere de un abordaje integrado, global y regional. Las soluciones por países o parciales son muy difíciles desde el momento en que la baja capacidad de regulación de los países, la precariedad y la falta de protección son factores decisivos en la relocalización de las industrias más contaminantes.

g. Involucrar a las y los trabajadores y sus organizaciones

Para finalizar, se debe destacar el papel de las organizaciones de trabajadores que por décadas han insistido para la puesta en práctica de algunos elementos clave para la reducción del riesgo químico, como los principios de precaución, de sustitución, de las mejores prácticas disponibles, etc. A nivel nacional, esto se traduce en la lucha por mejoras en la legislación sobre riesgo químico, para la protección para la salud de los trabajadores y del ambiente en general frente a las sustancias peligrosas.

Tanto la importancia del problema, la enfermedad y muerte de muchos trabajadores, y la comprensión de la propia capacidad de incidencia que tienen las organizaciones sindicales en el mismo tienen que ser acicates para que las organizaciones sindicales redoblen sus esfuerzos.

En temas de salud laboral muchas veces el liderazgo sindical es menos consciente de la urgencia que los trabajadores de las diferentes instalaciones. Llevar la negociación colectiva más allá de las condiciones salariales, para incluir cláusulas de salud laboral, es una herramienta poderosa. Proyectos como este son necesarios para mejorar la comprensión de las necesidades, y sobre todo de las posibilidades de cambio.

A nivel internacional, el movimiento sindical ha participado activamente en el desarrollo del Enfoque Estratégico SAICM. La Confederación Sindical Internacional (CSI) se involucró desde el comienzo en el proceso de negociación, participando y haciendo sus aportes en las diferentes Reuniones "PrepCom" de SAICM.

Las organizaciones sindicales son actores fundamentales para conseguir la gestión racional de las sustancias químicas, los trabajadores y trabajadoras son parte de las víctimas, pero también forman parte de la solución. Para una exitosa implementación de SAICM es necesario reconocer este aporte abriendo espacios concretos de participación y diálogo, además del diseño de estrategias para la formación de los trabajadores, y mecanismos transparentes de control e información a la sociedad.

COMBATIR EL RIESGO QUÍMICO EN AMÉRICA LATINA

Mejor proyecto QSP de Sociedad Civil en América Latina México 2013

Fortalecer a los sindicatos para mejorar su capacidad de intervención y facilitar el diálogo para contribuir con la implementación de SAICM.

Principales Logros

- Apertura, ampliación o reactivación de mecanismos de diálogo;
- Propuestas sobre normativa y legislación;
- Cambios en las sustancias y procesos y medidas de prevención en los puestos de trabajo;
- Propuestas de cláusulas en convenios colectivos.

Buscar soluciones conjuntas: 3 Conferencias Multipartitas

Por primera vez, gobiernos, sindicatos, empleadores, ONGS, y otros actores sociales se reunían para abordar el tema en: Una Conferencia Regional con 200 representantes gubernamentales, sindicales y de empleadores de Brasil, Chile y Uruguay. Conferencias Nacionales en El Salvador y República Dominicana, con cerca de 200 participantes de los más diversos sectores cada una.

¿Cuál es la realidad en los países? 6 Informes Nacionales

Los Informes Nacionales sobre la situación de las sustancias químicas y su gestión en los seis países han sido una importante contribución para las organizaciones sindicales, gobiernos y demás actores. Los informes son innovadores porque tratan conjuntamente las cuestiones de salud laboral y ambiental y aportan el punto de vista del mundo del trabajo.

65.000 personas alcanzadas por materiales de campaña

Folletos y afiches para la prevención del riesgo químico en temas como minería, industria química, del plástico, del papel, de fertilizantes, piscicultura, agricultura. Spots radiales, conferencias de prensa, blogs, boletines electrónicos, anuncios en periódicos nacionales. Se hizo uso de los medios de sensibilización tradicionales y nuevos.

1.254 trabajadores/as formados para actuar en los puestos de trabajo

El proyecto formó a trabajadores y trabajadoras de la minería, agricultura, papeleras, siderúrgica, industria química, plásticos, fertilizantes, piscicultura, funcionarios públicos, trabajadoras/es de limpieza, recuperadores de residuos, personal de puertos y aeropuertos, etc. El 30% fueron mujeres. Se distribuyeron además, 4.800 manuales de formación producidos especialmente por el proyecto.

La sostenibilidad del proyecto: 10 Grupos de Trabajo

El proyecto fortaleció las capacidades sindicales para tratar los temas de Riesgo Químico. Se establecieron o consolidaron equipos de trabajo y la temática entró para quedarse en la agenda sindical.

DÓNDE Y CUÁNDO

Brasil, Chile y Uruguay
2008—2010

El Salvador, República Dominicana y Nicaragua
2011—2013

CON QUIÉN

Trabajadoras, trabajadores y sindicatos, representantes gubernamentales, organizaciones de sociedad civil, empleadores, instituciones académicas y de investigación

CONTACTO

C/ Gral. Cabrera 21 28.020 Madrid | España | www.sustainlabour.org | info@sustainlabour.org | + 34 91 449 1040

sustainlabour

International Labour Foundation for Sustainable Development

